**I UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL**

**NEGACIÓN DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS DEL TRABAJO**

Trabajo Especial de Grado,
presentado como requisito
parcial para optar al Grado de
Especialista en Derecho
Procesal

Autor: Jorge Eliézer Leal Rangel

Asesor: Jesús Alberto Labrador Suárez

San Cristóbal, 11 de Mayo de 2009

UNIVERSIDAD CATOLICA “ANDRES BELLO”
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

APROBACIÓN DEL ASESOR

En mi carácter de Asesor del Trabajo Especial de Grado, presentado por el ciudadano Abogado Jorge Eliézer Leal Rangel, para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal, cuyo título es: “Negación de Acceso a la Jurisdicción en los Conflictos Colectivos del Trabajo”; considero que dicho Trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la evaluación por parte del jurado examinador que se designe.

En la Ciudad de San Cristóbal, a los 11 días del mes de Mayo de 2009.

Jesús Alberto Labrador Suárez
CI. V-3.008.022

UNIVERSIDAD CATOLICA "ANDRES BELLO"
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

**NEGACIÓN DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS DEL TRABAJO**

Por: Jorge Eliézer Leal Rangel

Trabajo Especial de Grado de Especialización en Derecho Procesal,
aprobado en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, por el
Jurado abajo firmante, en la ciudad de Caracas, a los _____ días del
mes _____ de _____.

INDICE

RESUMEN.....	vii
INTRODUCCIÓN.....	1
I. ACCESO A LA JURISDICCIÓN.....	4
A. LA JURISDICCIÓN.....	4
1. Definición.....	4
B. ACCESO A LA JURISDICCIÓN.....	17
1. Definición.....	17
2. Implicaciones como Derecho.....	27
II. CONFLICTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO ENFOCADOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTICULO 5 Y 469 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO.....	45
A. CONFLICTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO.....	45
1. Definición.....	45
2. Causas de su Origen.....	50
3. Objetivo del Conflicto.....	52
4. Clases de Conflictos.....	53
5. Conflictos Plasmados en la Norma: Jurídicos o de Derecho ó Económicos o de Interés.....	59
6. Consecuencias que Trae Consigo, Desde el Punto de Vista Procesal, la Calificación del Conflicto Colectivo.....	63

III. MATERIAS QUE PERTENECEN A LA CONCILIACION Y AL ARBITRAJE CUYA COMPETENCIA NO ESTA ATRIBUIDA A LOS TRIBUNALES LABORALES, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO EN SU NUMERAL 1ERO.....	66
A. LA CONCILIACIÓN.....	67
1. Definición.....	67
2. Materias Pertencientes a la Conciliación.....	68
3. Materias que desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Trabajo, pertenecen a la conciliación.....	70
B. EL ARBITRAJE.....	78
1. Definición.....	78
2. Materias Pertencientes al Arbitraje.....	82
3. Materias que desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Trabajo, pertenecen al arbitraje.....	84
IV. COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO PARA CONOCER LOS ASUNTOS QUE CORRESPONDEN A LA CONCILIACIÓN Y AL ARBITRAJE: NUMERAL 1° DEL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 5 Y 469 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO.....	88

A. CONSECUENCIAS DE SU NEGACIÓN.....	89
1. Desde la Perspectiva de las Relaciones Empleador- Trabajador.....	89
2. Desde la Perspectiva del Derecho Constitucional Procesal.....	91
CONCLUSIÓN.....	103
RECOMENDACIÓN.....	108
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	109

UNIVERSIDAD CATOLICA “ANDRES BELLO”
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO
AREA DE DERECHO
ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL

**NEGACIÓN DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN EN LOS CONFLICTOS
COLECTIVOS DEL TRABAJO**

Autor: Jorge Eliézer Leal Rangel.
Asesor: Jesús Alberto Labrador

Suárez

Fecha: 11 de Mayo de 2009

RESUMEN

La presente investigación se concretó en estudiar ¿qué comporta? la negación de acceso a la jurisdicción en los conflictos colectivos del trabajo, en los términos del artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículo 29 en su numeral 1º de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Para ello, se analizaron documentos de tipo jurídico, y se trataron las normas mencionadas bajo un tipo de interpretación gramatical, teleológica, axiológica y sistemática, bajo la óptica de las garantías y derechos reconocidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, dicha investigación aportara a los operadores de justicia una interpretación de las normas transcritas acordes con los nuevos paradigmas del derecho constitucional procesal: “la tutela judicial efectiva”, para con ello no vulnerar los derechos que tiene todos y cada uno de los trabajadores en ser conocida su pretensión procesal-laboral por el poder judicial, y así ver materializada de una manera eficaz y efectiva su derecho sustantivo. De esta manera tal investigación se centra dentro del nivel descriptivo de tipo documental. El presente estudio determinó que una errónea interpretación de los conflictos colectivos del trabajo comportará la negación del acceso a la jurisdicción, vulnerando de esta manera la tutela judicial efectiva en todo su contenido.

Descriptores: acción, conflictos colectivos del trabajo, conflictos jurídicos o de derecho, conflictos económicos o de interés, jurisdicción, tutela judicial efectiva.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación fue orientado analizar uno de los conceptos que esta en boga en los Tribunales de la República y que en otros hemisferios ha sido tratado desde hace un buen tiempo atrás: caso de España, como lo es la “tutela judicial efectiva”; enfocado este desde el punto de vista del derecho del trabajo, y más específico aún, desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo.

Para ello, el tipo de investigación utilizado, fue el descriptivo del tipo documental, bajo la técnica de la observación bibliográfica o documental, por cuanto el estudio se baso en el análisis de la información aportada por documentos bibliográficos reflejados en doctrina extranjera y nacional y jurisprudencia del máximo Tribunal de la República.

Dicho análisis se hizo a través de la interpretación gramatical, teleológico, sistemático y axiológico, ya que, se fijó el sentido de la norma jurídica que regula el acceso a la jurisdicción en el ámbito laboral en lo que respecta a los conflictos colectivos del trabajo haciendo uso de los métodos anterior descritos.

Para un mejor desarrollo y manejo del trabajo, a los efectos de dar respuesta al objetivo general, fue estructurado en cuatro capitulos: titulado el primero: “acceso a la jurisdicción; el segundo: “conflictos colectivos del trabajo enfocados desde la perspectiva del artículo 5 y 469 de la LOT”; el tercero: “materias que pertenecen a la conciliación y al arbitraje cuya competencia no esta atribuida a los tribunales laborales, desde la perspectiva del artículo 29 de la LOPT en su numeral 1ero; y el cuarto: “competencia de los tribunales del trabajo para conocer los asuntos que

corresponden a la conciliación y al arbitraje: numeral 1º del artículo 29 de la LOPT en concordancia con el artículo 5 y 469 de la LOT”.

La ideas manejadas en cada uno de los capítulos permitió dar respuesta al objetivo general, al llegar a la conclusión de que la implicación que trae consigo el negarle jurisdicción al poder judicial, específicamente a los Tribunales Laborales para conocer aquellos conflictos que son tratados por el artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo, implica una violación parcial de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente de la “tutela judicial efectiva”, ya que existiendo un conflicto jurídico en las normas en comento, entendido como aquellos cuya resolución amerita la interpretación y aplicación del derecho, el legislador laboral, en concordancia con el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, buscó que tales fueran conocidos por la administración, específicamente, por las Inspectorías del Trabajo, y a través de un procedimiento que en primer lugar busca es que sean las mismas partes las que den respuesta y cesen sus conflictos; no ocurriendo tal implicación violatoria a la mencionada “tutela judicial efectiva”, cuando el legislador exime del poder judicial el conocimiento de conflictos económicos o de interés manejados en las mismas normas 5 y 469 de la Ley Sustantiva Laboral, por cuanto su resolución no amerita la interpretación y aplicación del derecho.

Ello plantea una importancia a la investigación, en virtud de que de manera inconsciente -por cuanto estaría escudado por las normas del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo- un Juez de la República podría estar violentando la Carta Magna, y un derecho humano fundamental, como lo es el acceso a la jurisdicción, que como derecho tiene todo aquel que tenga un conflicto que resolver. Es por ello necesario conocer la naturaleza del conflicto que

se manejan en las normas antes mencionadas y entender la implicación que lleva consigo eximirse de su conocimiento, aún y cuando ese haya sido el enfoque del legislador, al establecer de manera imperativa que los conflictos a que se hacen referencia allí, sean canalizado por la administración pública.

CAPITULO I

ACCESO A LA JURISDICCIÓN

A. LA JURISDICCIÓN.

1. Definición:

Antes de entrar a analizar la llamada “jurisdicción”, como concepto jurídico, es importante tener en cuenta, cuál fue la razón por la cual nace este concepto tan debatido en el mundo del Derecho, y más específicamente del Derecho Procesal, así como su evolución.

Así se tiene, que en un primer momento de la historia, el mismo ser humano defendía el respeto de sus propios derechos, circunscribiéndose a una función eminentemente privada, es decir, no estaba de por medio un ente que lo hiciera por él.

Esta circunstancia, trajo como consecuencia que se impusiera la ley del más fuerte, y por ende, una situación de injusticia, ya que, independientemente de quién objetivamente tuviese la razón, el más fuerte se imponía sobre el débil, quedando lesionado el derecho que fuere irrespetado por aquel; además de que ello no solo rasgaba el principio de justicia, sino que atentaba contra la paz social, como uno de los fines mediatos del Derecho y del ente que posteriormente sería llamado “Estado”.

En este sentido, esa situación de autodefensa que “combina la parcialidad y el egoísmo, aparece desde el primer momento como una solución deficiente y peligrosa en grado superlativo”(Alcala Zamora, citado por Solís, 2005: 27)

En una etapa más avanzada de la historia, y constituyéndose los grupos de seres humanos en organizaciones formalmente constituidas –lo que luego fue denominado el Estado-, estas, se limitaron a asumir una función pacificadora, interviniendo sólo como árbitros a los efectos de componer las controversias privadas (Solis, 2005)

La función jurisdiccional surge:

“en los albores históricos de la civilización, con propósitos de pacificación social: de suerte que la acción del juez, en las coasociaciones primitivas, aparece como la de un pacificador que se interpone para dirimir los conflictos surgidos entre intereses individuales, en aquellos únicos casos en los que los individuos no hayan conseguido ponerse de acuerdo por su cuenta mediante el contrato”.(Calamandrei, citado por Solis, 2005: 27)

En esta etapa que sirvió como embrión al nacimiento del Estado moderno, la función de resolver los conflictos estaba encomendada al Rey, Emperador o Príncipe, -además de las otras funciones principales del Estado moderno- la cual delegaba en otros sujetos. Como podrá observarse, en aquel estaban concentradas todas las funciones del poder, que en el Estado moderno, se entiende, deben ostentarlas distintos órganos, a los efectos de evitar el despotismo y corrupción que trae consigo el poder en cabeza de un sólo sujeto.

En este sentido, expresa Solis (2005), que la noción de función jurisdiccional como concepto jurídico, surge con el reconocimiento de la soberanía del pueblo, el acaecimiento del Estado moderno y la separación de sus poderes.

Es por ello que Segni (citado por Solis, 2005:28), advierte: “con la aplicación de este principio la función jurisdiccional se distingue y

contrapone a las otras funciones estatales (legislación y administración), adquiere caracteres propios y deviene en una función independiente y autónoma del Estado”.

En este mismo sentido expresa Cuenca (2005:74): “Después de la división del poder público en los tres poderes, según la teoría de Montesquieu, la jurisdicción se emancipó definitivamente del *imperium* administrativo o ejecutivo y constituyó una organización estatal, con carácter autónomo e independiente”.

En este mismo orden de ideas, se puede concluir, que el Estado asume la función, entre otras, de dirimir los conflictos que se susciten entre los particulares, a los efectos de evitar que estos, por sus propias manos, diriman las disputas que se originan por el irrespeto de los derechos, que como seres humanos poseen y que le es reconocido por el ordenamiento jurídico emanado del aquel. Función que en un momento de la historia ejerció el Monarca, muchas veces por medio de subditos a quienes les delegaba dicha función; y luego, en la constitución del Estado moderno impregnado del principio de la separación de poderes, un órgano a quien se le adjudicó dicha tarea, distinto de aquel que le correspondía administrar y legislar.

En este sentido, expresa Cuenca (2005:74):

“El Estado al formular el ordenamiento jurídico por medio de la función legislativa, produce dos clases de normas, la primera, de carácter indicativo, que describe la conducta que debe seguir cada ciudadano, y la segunda, que contiene la sanción aplicable en caso de desobediencia o desacato. Si el Estado se limitara a formular preceptos sin sanciones, los agraviados reaccionarían violentamente para obtener la debida reparación y se harían justicia por sí mismos. Este es precisamente el fundamento que justifica la existencia de la jurisdicción como poder del Estado para dirimir los conflictos subjetivos, dictar

sentencias, aplicar sanciones y evitar la alteración de la paz pública y de la tranquilidad social.”

Obsérvese, que en este pequeño análisis de la evolución de la llamada “jurisdicción”, ya se empiezan a dar los primeros pasos para entender este concepto jurídico. Y es el hecho, de que el mismo va dirigido, por lo menos, entendido en un sentido amplio, a dirimir las disputas que se susciten entre los particulares, *restringiendo* la autodefensa de estos en protección de sus derechos, por las razones que ya fueron mencionadas líneas arriba.

Fíjese que en el párrafo anterior se utilizó la expresión “restringir” y no “eliminar”. Ello se explica, por cuanto el Estado restringió la autodefensa, más no la eliminó, de allí que se observe ciertas situaciones en la que el ordenamiento jurídico permite que el mismo particular proteja su derecho sin necesidad de acudir al auxilio del Estado, tales como por ejemplo: la huelga en las relaciones colectiva de trabajo, regulada en el artículo 494 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo; la legítima defensa, regulada en el artículo 65 en su numeral 3ero del Código Penal, entre otras instituciones.

En este sentido, habiéndose entendido en el pequeño análisis realizado en la evolución de la “jurisdicción”, hacia dónde se orienta este concepto del derecho, las siguientes líneas serán dedicadas a determinar la definición que los estudiosos en la materia han planteado sobre el mismo; no sin antes analizar el origen etimológico de la expresión:

La palabra “jurisdicción” proviene del latín *iuris-dictio*, cuyo significado es: “decir el Derecho”.

Sin embargo, según Ortiz (2001), la noción etimológica no es la que precisamente se maneja en el Derecho Procesal, ya que, decir el

Derecho, es una función que puede ejercer tanto la Administración Pública, en el caso de dictar por ejemplo un acto administrativo o cuando el Poder Legislativo establece conceptos que no son preceptos de conducta.

Asimismo opina Bonjeam (citado por Solis, 2005:22), sobre la función de declarar el Derecho que tiene la jurisdicción, en su acepción etimológica, cuando al referirse a ella, expresa “tiene un campo de acción muy extenso, pues se refiere también al legislativo y al ejecutivo, por cuanto dar o declarar el derecho es reglamentar las relaciones sociales, sea creándolo o aplicándolo.” y Carnelutti (citado por Solis, 2005:22):

“a la luz del buen sentido aparece indudable que *ius dicunt* no sólo el juez cuando mediante la sentencia decide una cuestión para componer un litigio, sino también y más bien el legislador cuando forma una ley e incluso, por otra parte, los contratantes cuando, a tenor del artículo 1123 Cód. civil, hacen del contrato ley entre ellos¹; en suma, esa potestad corresponde, no sólo al juez sino a toda persona cuya declaración posea el carácter de fuente del derecho”.

A pesar de que podría decirse, que aunque la expresión etimológica no expresa lo que realmente corresponde al concepto de “jurisdicción”, se acerca bastante, por cuanto, como lo han afirmado y están contestes los juristas citados arriba: declarar el Derecho no caracteriza a la jurisdicción ya que otros órganos o funciones del Estado pueden estar ejecutando dicha labor, sin embargo, no han negado que ella también lo realice. Pero, hay que tener presente, que la expresión jurisdicción, sí se ha utilizado desde otros puntos de vista totalmente ajenos a lo que arroja su noción etimológica.

¹ En el ordenamiento jurídico venezolano, artículo 1159 del Código Civil.

Por ello Couture (2005:33), apunta lo siguiente: “En el derecho de los países latinoamericanos este vocablo tiene, por lo menos, cuatro acepciones: como ámbito territorial; como sinónimo de competencia; como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público; y en su sentido preciso y técnico de función pública de hacer justicia”.

Así se tiene: como ámbito territorial, como por ejemplo, cuando se habla de aguas jurisdiccionales al referirse a los cauces fluviales o marítimos que bordean el territorio de un país; como sinónimo de competencia, cuando se hace mención, por ejemplo, a la jurisdicción Civil, Mercantil o Constitucional, siendo lo correcto jurisdicción con *competencia* en lo Civil, Mercantil o Constitucional.

Con respecto a este punto hay que dejar claro que nuestra legislación no ha quedado al margen de dicho equívoco, así se observa en el numeral 1ero del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando establece entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra la de ejercer *la jurisdicción* constitucional conforme al Título VIII de dicha Constitución; confundiendo de esta manera competencia con jurisdicción.

Con respecto a esto último expresa Couture (2005:34):

“Hasta el siglo XIX los conceptos de jurisdicción y competencia aparecen como sinónimos. Indistintamente se alude a la falta de jurisdicción como falta de competencia en sentido material, o en sentido territorial, o aun para referirse a la función. Pleonásticamente se llega hablar de incompetencia de la jurisdicción.

En el siglo XX, por regla general, se ha superado este equívoco; pero quedan abundante residuos en la legislación y en el lenguaje forense.”

Asimismo, se ha utilizado como sinónimo de “poder” en textos legales, para hacer referencia al poder de determinados órganos del Estado, específicamente los del Poder Judicial. (Couture,2005).

Y, por último, como “función”, la cual se dirigiría a entenderla como *función* del Estado de administrar justicia, existiendo, como dice Couture (2005), cierta sinonimia entre función judicial y función jurisdiccional. Siendo importante tener presente en cuanto a éste punto, lo expresado por este jurista, cuando apunta que no toda la función del poder judicial es jurisdiccional, como sería la llamada jurisdicción voluntaria, la cual, ha sido entendida en un momento dado, afirma Cuenca (2005:88), como una “función administrativa del tribunal, pero con carácter público, para administrar intereses privados.”; asimismo, sigue expresando el jurista Couture, que tampoco toda función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial, ya que existen, a su entender, funciones jurisdiccionales a cargo de otros órganos que no son el Poder Judicial; sin embargo, aclara, que normalmente y en términos generales, la función jurisdiccional coincide con la función judicial.

Ahora bien, seguidamente se explanarán algunas definiciones que sobre este concepto ha maneja la doctrina. Así se tiene:

“La jurisdicción consiste en la actuación de la ley mediante la sustitución de la actividad de los órganos públicos a la actividad ajena, ya sea afirmando la existencia de una voluntad de la ley, ya poniéndola posteriormente en práctica”(Chiovenda, citado por Solís, 2005:45)

“Es el poder público, que una rama del gobierno ejercita , de oficio o a petición de interesado, instruyendo un proceso, para esclarecer la verdad de los hechos que afectan el orden público, actuando la ley en la sentencia y haciendo que esta sea cumplida”(Podetti, citado por Solís, 2005:49)

“La función específica estatal que tiende a la satisfacción de pretensiones”(Guasp, citado por Solís, 2005:52)

“Es la expresión del poder soberano asumido por el Estado, como consecuencia de la supresión de la violencia privada, indispensable, junto con el poder correlativo de la acción, para la válida constitución del proceso, único mecanismo a través del cual se la ejerce, mediante delegación en órganos especializados en la tutela judicial de los intereses jurídicos”(Longo, citado por Solís, 2005: 74)

“Función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución.”(Couture, 2007:45)

“El poder de administrar justicia o, más concretamente, como el poder de declarar el derecho y de aplicar la ley”.(Cuenca, 2005:73)

“Potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por tribunales independientes y predeterminados por la ley, de realizar el derecho en el caso concreto juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado, para satisfacer pretensiones y resistencias.”(Aroca, citado por Ortiz, 2001:110)

“Es una función reservada por el Estado, en uso de su soberanía, para ejercerlo en forma de servicio público por órganos predeterminados e independientes, para la realización concreta de las peticiones de los ciudadanos con carácter definitivo y con posibilidad de coacción”.(Ortiz, 2001:113)

Cada una de estas definiciones, con las críticas o elogios que pudieren recibir, --y que por no ser objetivo principal de la presente investigación, no se entrarán analizar profundamente- manejan elementos comunes y algunos discordantes, como por ejemplo, no existe discordancia en que es una función ejercida por el “Estado”, expresándolo así todas las definiciones, salvo Cuenca, que la maneja de manera implícita. Asimismo,

difieren en el hecho de asumir que la jurisdicción esta orientada a resolver conflictos, por cuanto se ha sostenido en la doctrina (Ortiz,2001), este elemento no es esencial a la jurisdicción, ya que puede existir un proceso sin que exista el aspecto conflictivo, y sin embargo, no se niega que se esta ejerciendo una función “jurisdiccional”. Tal es el caso, por ejemplo, cuando se conviene en la demanda. Obsérvese que en este caso no ha existido conflicto de intereses, ya que el demandado ha aceptado los términos plateados por el demandante, y por ende, no se ha generado un conflicto de intereses ni de derecho, y sin embargo se esta ejerciendo actividad jurisdiccional.

Es por ello, que algunos juristas enfocan “la satisfacción de pretensiones y resistencia” como lo hace Aroca, o “para la realización concreta de las peticiones”, como lo hace Ortiz, cuando hacen referencia en sus definiciones, a la función de la jurisdicción, y no como factor de resolución de conflictos.

Ahora bien, sin dejar de lado los diferentes enfoques que pudieren existir en la doctrina al momento de su estudio y conceptualización, hay que tener presente, que jamás podrá haber discordancia en que se trata de un *función* que ejerce el Estado, hasta el punto que Ortiz(2001) la define con un “servicio público”; que nació para *restringir* la defensa privada de los derechos e intereses; que busca la satisfacción de un interés del ser humano, ya sea resolver un conflicto o más ampliamente una pretensión y su correlativa resistencia; que aunado a ese interés del ser humano de tener seguridad jurídica y paz social, lo decidido tiene la posibilidad de adquirir el carácter de irrefragable y además, que existe la posibilidad de su ejecución de manera forzosa en caso tal de rebeldía de aquel, a quien va dirigido la obligación nacida a través del acto jurisdiccional.

Todas estas características, se resumen en una palabra que describe ampliamente a la “jurisdicción” y es la expresión: “deber jurídico.” Entendiéndose por ello: “La necesidad de observar una determinada conducta (acción u omisión) bajo la amenaza de una sanción coactiva impuesta por la norma en orden a obtener un bien jurídico.” (Olaso, 2007:276)

Pues bien, la jurisdicción inexorablemente hay que entenderla como un *deber jurídico* a cargo del Estado, ya que este le ha quitado la posibilidad al hombre de que por sí mismo defienda sus propios derechos; hasta el punto de ser penado por la ley aquel que se haga justicia por sus propias manos, tal como lo establece el artículo 271 del Código Penal.

Ahora bien, si el Estado le quitó esa posibilidad al hombre, lógicamente debe darle el mecanismo para que ese derecho no quede vulnerado; ya que, sería un contrasentido que el Estado le prohíba proteger por sí mismo sus propios derechos, y a su vez, no le otorgue instituciones que se encarguen de dicho fin. En este caso, la norma que plasmase tal prohibición sería plenamente ineficaz.

En este mismo orden de ideas, ratifica tal posición Ortiz (2005) al entender a la Jurisdicción como un “servicio público”, es decir, el hecho de ser un deber a cargo del estado.

Hay quienes la definen como una potestad, punto de vista no compartido, por cuanto ello denota una facultad de hacer algo, que puede o no darse, dependiendo de la voluntad de quien la detente.

En este sentido, el Estado no detenta la facultad de dar o no al individuo mecanismos para que resuelvan sus conflictos; ó más ampliamente sus pretensiones y resistencia; aquel está en el *deber* de dar

dichos mecanismos, porque como ya se hizo mención líneas arriba: no puede prohibir la defensa privada de los derechos y a su vez eximirse de dar protección a los mismos.

Por ello, una definición de “jurisdicción”, acorde con lo que se ha planteado hasta los momentos, sin dejar de tomar en cuenta los puntos de vista de quienes se han dedicado a estudiar la institución, de la cual compartimos, y que a su vez, puede no ser invulnerables a críticas validas, sería:

“Deber del Estado, canalizado a través de órganos independientes, predeterminados por la Constitución o la Ley, de resolver las *peticiones de derecho* que planteen todo aquel que tenga un interés, y cuya resolución tiene la posibilidad de adquirir firmeza, a los efectos de seguridad jurídica como uno de los fines del Derecho y susceptible de ejecución forzosa ante la eventual resistencia del obligado”.

Obsérvese, que se hace hincapié en la expresión “*petición de derecho*”, y ello es así, puesto que la jurisdicción -y que en el caso venezolano se ejerce por los órganos del Poder Judicial, específicamente por los Tribunales- no resuelve peticiones de “interés”, es decir, aquellas peticiones que se llaman en el Derecho del Trabajo: “conflictos de interés”. Punto a la cual se dedica su análisis en un capítulo del presente trabajo y que al llegar a dicho punto, se retomará la idea planteada en este título.

En este sentido, se debe concluir, que la jurisdicción así entendida, es una función del Estado, y más específicamente: un *deber* y no una potestad, ya que no tiene la posibilidad de eximirse de esa función por su propia voluntad.

B. ACCESO A LA JURISDICCIÓN.

1. Definición:

Habiéndose entendido lo que es la “jurisdicción”, éste título dedicara sus líneas al análisis del acceso a dicho fenómeno jurídico y la implicación de ello, desde el punto de vista de los derechos garantizados por las Constituciones del mundo e incluso por instrumentos Internacionales suscritos por los Estados o emanados de órganos Supraestatales.

Cuando se utiliza la expresión “acceso”, se le esta dando el significado que corresponde al idioma castellana y no en un sentido técnico que pudiere darle una connotación distinto.

El diccionario de la Real Academia entiende por acceso: “Acción de llegar o acercarse”; “entrada o paso”.

Llevando dichos significado del verbo al fenómeno jurisdicción, debe entender por acceso a él: la llegada, entrada o paso de todo aquel que tenga un interés, a ese deber del Estado en decidir sus peticiones con relevancia jurídica.

Vista la relación íntima que posee la “acción” con el llamado “acceso a la jurisdicción”, se entra al análisis de aquel fenómeno de ardua discusión en la doctrina del Derecho Procesal, es decir, la “acción”, ya que como lo expresa Ortiz (2001,115): “el derecho a la jurisdicción significa el acceso ante los órganos jurisdiccionales, y tal posibilidad se denomina acción”.

Ahora bien, ¿como entenderla?

Obsérvense algunas definiciones:

“Es un poder público, puesto al servicio de un interés colectivo, que provoca la actividad jurisdiccional para obtener la tutela jurídica del Estado. Es un poder que la ley coloca a disposición de todos los ciudadanos, sin distinción alguna, garantizado expresa e implícitamente por los ordenamientos jurídicos contemporáneos, y a veces este poder es confiado a la propia iniciativa del órgano jurisdiccional en ciertos litigios de orden público”.(Cuenca,2005:135)

“Poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”.(Couture, 2007:59)

“Potestad recibida del Estado por los particulares de promover la actividad jurisdiccional para la actuación de la ley”.(Prieto Casto, citado por Ortís, 2001:118)

“Un derecho a excitar la actividad jurisdiccional del Estado, un derecho cívico fundamental inherente a la personalidad con base en el derecho constitucional de petición”.(Fairen Guilleán, citado por Ortís, 2001:118)

“Posibilidad jurídico-constitucional por la cual se dirigen peticiones ante el servicio de la jurisdicción”.(Sentencia No. 511 de 24 de mayo de 2000, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, citada por Ortís, 2004:171)

Esta última definición, plasmada en una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de la cual fue ponente el Jurista Rafael Ortiz-Ortiz, lo establece como una *posibilidad jurídico constitucional*. Siendo ello plenamente válido, puesto que efectivamente la Constitución venezolana da al individuo la posibilidad jurídica de acudir ante los órganos jurisdiccionales a plantear sus pretensiones de relevancia jurídica, y así se observa del artículo 26:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de

los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”

Pero no sólo esta constitución plasma esta posibilidad, además de ella, otras, tales como:

Artículo 24 de la Constitución Española:

“Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”

Artículo 23 de la Constitución Colombiana:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”

Artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina:

“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de *peticionar* a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”(cursiva añadida)

Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Ecuador:

“Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los

siguientes:(...)15. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero en ningún caso en nombre del pueblo; y a recibir la atención o las respuestas pertinentes, en el plazo adecuado.”

Artículo 30 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay:

“Todo habitante tiene derecho de petición para ante todas y cualesquiera autoridades de la República.”

Asimismo, instrumentos internacionales, tale como:

La Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en su artículo 10 expresa:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Sin embargo, es de considerar, que la acción va mucho más allá de ser una simple posibilidad jurídica constitucional, como fue conceptualizado en la sentencia mencionada, ya que, cuando se hable de posibilidad esto quiere decir: “Aptitud para hacer o no hacer una cosa”(García,1988:825); pero fíjese que se queda allí.

Si bien es cierto que todos los individuos tienen la aptitud o facultad para plantear pretensiones ante los órganos llamados a conocer de la función jurisdiccional, también es cierto que estos están en el *deber jurídico* de conocer de dichas pretensiones y hasta decidir las; y es tanto así, que de no conocerlas y decidir las están incurriendo en denegación de justicia. Por ello, considera el autor de la presente investigación, que la acción, más que ser una *posibilidad jurídica constitucional*, es un *derecho*

que tiene todo individuo y así se observa de la misma norma del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando expresa que “Todas persona tiene *derecho* de acceso a los órganos de administración de justicia(...)”(cursiva añadida); asimismo, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todas persona tiene *derecho*, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial(...)”(cursiva añadida).

En este sentido, se disiente de la interpretación dada por Ortíz (2001:117) cuando expresa que la acción no es un derecho; y lo hace en los siguientes términos:

“(...)Más que un derecho, la acción se concibe como una posibilidad; en efecto, nos alejamos de la concepción del llamado derecho de acción porque para saber si la acción es un derecho es necesario fijar posición en cuanto a lo que el derecho es; y si, por otra parte, se acepta como válida la tesis de KELSEN según la cual “el derecho es un sistema de normas” cuya nota esencial es la de ser un sistema de imputaciones coactivas” de consecuencias a hechos antecedentes, entonces puede fácilmente colegirse que la acción no es coactiva ni mucho menos “imputativo” de consecuencias a hechos precedentes. Se trata de una “posibilidad” en el entendido que constituye un “poder de hacer” puesto en cabeza de los justiciables para invocar la tutela jurisdiccional en aras de la satisfacción de un interés, por simple que sea, o para la realización coactiva de un derecho frente a una controversia.”

Es cierto que la acción no es el derecho mismo, ya que se puede acudir ante el órganos jurisdiccional así no se tenga el derecho material, la cual va a traer como consecuencia una sentencia cuyo dispositivo deberá expresar: “SIN LUGAR”, sin embargo ya habrá existido función jurisdiccional activado por la acción; pero es de considerar que cuando el jurista opina que la acción no es un derecho, no es del todo cierto.

Cuando el jurista opina en este sentido –la acción no es un derecho-, se está basando en la conceptualización que de “Derecho” da Kelsen, pero obsérvese que este, está conceptualizando es el “derecho objetivo” y no el “derecho subjetivo”, la cual es: “El poder exclusivo conferido a una persona para actuar en su ventaja la tutela jurídica”(Castán Tobeñas, citado por Olaso, 2007:281)

Con respecto a este concepto restringido de “derecho subjetivo”, expresa Olaso (2007:280): “(...)se perfila únicamente en relación con su reverso –el deber jurídico- y con la protección brindada por la norma; o sea, se reduce y coincide con el elemento externo y, en él, más concretamente, con el derecho “a la acción”.”

Fíjese que el Estado tiene el *deber* de resolver las pretensiones que le presenten los particulares; cumpliendo esta función a través de órganos independientes e imparciales, la cual es la “jurisdicción”. Correlativo a ese *deber*, como lo ha expresado Olaso, existe el *derecho* del particular de plantear dichas pretensiones al Estado, que es lo que se conoce como la *acción*.

En el sentido que fue conceptualizado el *derecho subjetivo*, lleva consigo el correlativo *deber*; mientras que la simple “posibilidad” no conlleva a ésta.

Por lo tanto, la acción es el derecho a la jurisdicción, tal y como lo plasma cierto sector de la doctrina, cuando expresa: “Un derecho a excitar la actividad jurisdiccional(...)”(Fairen Guilleán, citado por Ortís, 2001:118)

Un particular puede exigir que el Estado cumpla el *deber* de conocerle y decidirle sus pretensiones, precisamente por tener *derecho* a ello, es decir, por poseer un *derecho subjetivo* que se lo ha reconocido el

ordenamiento jurídico, a través de normas estatales como la Constitución y normas supraestatales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo, en este sentido, reconocido por el *derecho objetivo*. Y es a éste y no aquel, a quien Kelsen define como “un sistema de normas”. Mientras que cuando se habla de una simple “posibilidad”, es sólo una situación de “aptitud o facultad para hacer o no hacer algo”, como lo define el diccionario, pero en caso de ejercer dicha facultad, no es posible exigirle jurídicamente su materialización a quién se oponga a ello, como sí ocurre cuando se tiene un “derecho subjetivo”.

Asimismo, es de advertir que la acción no sólo es un derecho, sino que además es un derecho *humano fundamental*. Entendiéndose por tal, según Pérez Luño (citado por Martínez y Perdomo, 2004:20):

“Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En tanto que con la noción de los derechos fundamentales se tiende a eludir a aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada.”

Y así, como derecho humano fundamental lo entiende el derecho positivo venezolano, cuando estructuralmente el constituyente ubica al artículo 26 dentro del Título III, denominado: “De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías”; así como el hecho de estar plasmado en un instrumento internacional referido a este tipo de derechos, tal como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 ó Pacto Internacional de derechos civiles y

políticos de 1966. Aceptada inclusive tal posición de la acción por cierto sector de la doctrina, hasta el punto de calificarla como un derecho *inherente* a la personalidad. Y así se observa de Fairen Guilleán (citado por Ortís, 2001:118), cuando lo establece como: “Un *derecho* a excitar la actividad jurisdiccional del Estado, un *derecho cívico fundamental inherente a la personalidad* con base en el derecho constitucional de petición.”(cursiva añadida).

De esta manera, se puede definir la acción como: Un derecho humano fundamental que materializa la jurisdicción como función-*deber* del Estado de resolver las pretensiones de relevancia jurídica que le sean planteadas por todo aquel que tenga un interés.

Es este el sentido que se debe tomar cuando se habla de *acceso a la jurisdicción* e inclusive calificado como un derecho humano de tercera generación (Martínez, Perdomo, 2004).

Ahora bien, ¿qué ha implicado entender ese acceso a la jurisdicción (acción-derecho a la jurisdicción) como un derecho, pero además un derecho humano fundamental?.

2.- Implicaciones como Derecho:

Inexorablemente la protección y reconocimiento por parte de entes Estatales y Supraestatales, ubicándolo dentro del llamada principio de la “Tutela Judicial Efectiva” e incluyéndola dentro de la norma suprema a los efectos de garantizar su materialización y con ello su no violación, es decir, operando la Constitucionalización de tales derechos.

El origen del principio de la “Tutela Judicial Efectiva” se remonta a la flagrante violación de los derechos humanos que se dio en la segunda

guerra mundial, que trajo como consecuencia el nacimiento en la conciencia de los pueblos de asumir un compromiso de respeto frente a tales derechos, es así como en la segunda mitad del siglo XX, se origina en Europa y especialmente en aquellos países que tuvieron regímenes totalitarios, un fenómeno de constitucionalización de los derechos fundamentales de las personas y dentro de los cuales se encontraron las garantías mínimas que debe reunir todo proceso judicial.

Esto con la finalidad que las futuras leyes no vulnerasen los derechos cuya protección ya la había asumido el Estado mediante la suprema norma Constitucional; entendiéndose que la verdadera garantía de los derechos de las personas se encuentra en su protección procesal; de allí la distinción entre los derechos del hombre y las garantías de dichos derechos que vienen siendo los medios procesales a través de los cuales es posible su realización y eficacia (Junoy, 1997)

Este fenómeno de la Constitucionalización de las garantías procesales como derechos fundamentales de las personas se observa en la Constitución Alemana e Italiana de 1947 y en esta última en el artículo 24 que establece:

Todos pueden actuar en juicio en defensa de sus propios derechos y sus legítimos intereses.

La defensa es un derecho inviolable en cualquier estado o grado del proceso. Mediante institutos especiales se les aseguran a los pobres los medios para actuar y defenderse ante cualquier jurisdicción.

A decir del jurista Ortiz (2001), de los estudios del autor Barnés Vásquez, se aprecia que el origen de la tutela judicial efectiva se encuentra en esta norma Constitucional y en los artículos 19.4 y 103.1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. Sin embargo, dentro de ésta último

cuerpo normativo, se aprecia la inclusión de la suprema garantía pero limitada frente al poder público, ya que establece: “Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrán recurrir a la vía judicial...” aún y cuando el Tribunal Federal ha ampliado el precepto más allá de su campo originario.

Asimismo, se encuentra recogido en instrumentos internacionales, tales como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, por cuanto el artículo 6 establece, entre otras cosas:

1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la Sala de Audiencia puede ser prohibida a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el Tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. (Junio, 1997, 19)

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual en el artículo 10 contempla el derecho de toda persona a ser oído públicamente en condiciones de igualdad y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella formulada en materia penal. Asimismo el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966 en su artículo 14.

Esta constitucionalización de las garantía procesales en España, se alcanzó plenamente en la Constitución de 1978 en su artículo 24, la cual establece:

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Dicha norma ha sido importante para el Derecho venezolano, puesto que la interpretación de la mencionada norma constitucional realizada por el Tribunal Constitucional de dicho País, a través de la abundante jurisprudencia emanado del mismo, ha permitido un mejor entendimiento del fenómeno por los Tribunales venezolanos, hasta el punto que en muchas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han sido tomadas de manera expresa o implícita las interpretaciones que sobre la tutela judicial efectiva ha hecho el Tribunal Constitucional Español.

Ahora bien, en Venezuela, se podría decir, la constitución que hizo una pequeña referencia a tal garantía procesal suprema fue la de 1961, la cual se observa en el artículo 68 que disponía: “Todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, en los términos y condiciones establecidos por la ley, la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de éste derecho a quien no disponga de medios suficientes”. Pero obsérvese que se refiere única y

exclusivamente para el acceso a la jurisdicción dejando por fuera otros contenidos de éste derecho.

No es sino hasta la Constitución de 1999 que se plasma tal garantía procesal constitucional, con un contexto semejante a la Constitución Española de 1978, en el artículo 26, la cual establece:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Ya no plasmado como un poder o facultad, tal como fue delineado en la Constitución de 1961, sino como un verdadero derecho subjetivo elevado a nivel Constitucional, perfectamente exigible por medio de mecanismos que otorga el Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, no limitado al sólo acceso a la jurisdicción, sino también a una verdadera tutela de los derechos ventilados por ante los órganos judiciales.

En Venezuela, el principio de la “Tutela Judicial Efectiva” tiene como soporte el artículo 2 Constitucional, al constituirla en un “Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”, tal como expresa Martínez y Perdomo (2004:31):

“Dentro de este Estado Social, se observa que los derechos establecidos en las normas constitucionales no son sólo garantías jurídico-formales, sino derechos plenos y efectivos, cuya exigibilidad no depende exclusivamente de los particulares, el Estado debe convertirse también en defensor de estos derechos y en el encargado de otorgarle efectiva aplicación. De aquí se desprende la materialización del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, entendido éste como la posibilidad que tienen las personas de que las pretensiones que formulen a la administración de justicia sean atendidas,

decididas y ejecutadas, siguiendo las reglas del debido proceso.”

Ahora bien, tal principio ha sido entendido en la Doctrina y Jurisprudencia Patria en los siguientes términos:

“(…)el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como garantía, implica, como principio general, el reconocimiento del derecho de acción, del derecho de acudir a los tribunales y de seguir un proceso judicial para que conozcan los órganos judiciales competentes e imparciales y para que se cumplan sus etapas fundamentales para obtener una decisión motivada, favorable o adversa a la pretensión deducida.”(Duque Corredor, citado por Martínez y Perdomo, 2004: 38)

“El concepto es de raigambre española y se encuentra estrechamente vinculado con la indefensión, involucrando a otros principios como son: el derecho al acceso a los tribunales; el derecho a la efectividad de las decisiones judiciales; y el derecho al ejercicio del recurso previsto en la ley”.(Escobar, citado por Perozo y Montaner, 2007)

“tutela judicial efectiva se materializa a través del proceso constituido por: el libre acceso de los ciudadanos de los órganos jurisdiccionales, la plena protección cautelar, la sustanciación de un proceso debido conforme a las garantías procesales fundamentales, la correcta aplicación del derecho al caso concreto y una efectiva ejecución de lo sentenciado”.(Díaz, citado por Perozo y Montaner, 2007)

“El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la

realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaure”. (Sentencia No. 708 de la Sala Constitucional de fecha 10-05-2001)

“(…)una de las proyecciones del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 26 de la Constitución, consiste en el derecho de que las decisiones judiciales alcancen la eficacia otorgada por el ordenamiento jurídico, lo que significa que las decisiones se ejecuten en sus propios términos, el respeto a su firmeza y la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas. Si se permite que el fallo se incumpla se convertirá a las decisiones judiciales y al reconocimiento de derechos que ellas comportan en mera declaraciones de intenciones (Sentencia No. 2212/2001 de fecha 09-11-2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes)

Concordando de esta manera con la Doctrina extranjera en cuanto al contenido de este principio, así se tiene que para Junoy (1997: 40):

“El derecho a la tutela judicial efectiva tiene, en palabras del T.C., *un contenido complejo* que incluye, a modo resumen, los siguientes aspectos: - El derecho de acceso a los Tribunales; - El derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; -El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y – El derecho al recurso legalmente previsto.”

Dentro del contenido de este principio, y a la cual se dedicará las líneas siguientes –por ser el epicentro del presente punto-, haciendo prescindencia de los demás, es el “derecho de acceso a los Tribunales”, o lo que es lo mismo, “el acceso a la jurisdicción”.

Según este autor y quien haciendo referencia a las decisiones del Tribunal Constitucional Español estable que este derecho comprende: - el derecho a la apertura del proceso; - la llamada de la parte al proceso, con especial atención a los requisitos constitucionales de los actos de comunicación; y – la exigencia de la postulación.

Esta apertura del proceso esta referida al demandante, puesto que este es la persona que solicita la intervención del órgano jurisdiccional a los efectos de resolver cualquier pretensión de relevancia jurídica.

Es importante tener presente, como lo afirma el mismo autor citado, que este derecho sólo puede ejercitarse por los cauces o caminos que el legislador establece, no siendo un derecho de libertad, ejecutable sin más y directamente de la Constitución; por ello, es denominado un “derecho prestacional de configuración legal”.

De allí que sea necesario ceñirse a los requisitos y presupuestos procesales legalmente previstos y no creados bajo un criterio caprichoso del legislador, sino que obedecen a necesidades de ordenar el proceso y con ello proteger derechos fundamentales de los particulares, como sería la seguridad jurídica, la igualdad, entre otros.

Pero hay que tener presente que dicho presupuestos y requisitos contemplados por el legislador no pueden crear obstáculos que no tengan un sustento o razonamiento lógico que lo justifiquen; y así lo contempla Junoy (1997:45):

“el derecho al acceso al proceso del art. 24.1 C.E. puede verse conculcado por normas que impongan requisitos impositivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.(...)”

Tales requisitos y obstáculos para el acceso al proceso serán constitucionalmente válidos si, respetando el contenido del derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida(...)

En cualquier caso, la interpretación y aplicación de tales requisitos legales debe realizarse de la forma más favorable a la efectividad de este derecho fundamental(...)"

Con base en este razonamiento, es que por ejemplo en Venezuela se ha considerado violatorio del principio de la Tutela Judicial Efectiva –en su contenido de acceso a la jurisdicción-, el agotamiento de la vía administrativa para poder tramitar la pretensión por la vía jurisdiccional. Así se tiene una sentencia de la Corte Primera de la Contencioso Administrativo de fecha 24 de Mayo de 2000, en el juicio de Raúl Rodríguez Ruiz contra el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, exp. 99-22392, Sentencia No. 511, la cual expresó:

"(...)El Texto Constitucional se encarga de establecer esta noción en el artículo 26 según el cual: *"Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos..."*, de modo que la petición cuando comporta "derechos o intereses" debe tener una "decisión con prontitud" y, además, una "tutela efectiva" de los mismos. La prontitud es uno de los valores que la Constitución maneja con mayor preocupación, así el propio artículo 26 dispone que el Estado garantizará una justicia expedita; el artículo 257 dispone la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites procesales y un procedimiento breve; y el propio artículo 51 califica que la respuesta a las peticiones de los ciudadanos tiene que ser "oportuna" y "adecuada". Aunado a este criterio se precisa en esta oportunidad que la propia Exposición de Motivos de la Carta Magna señala: *"De igual manera y con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de los administrados y garantizar su derecho de libre acceso a la justicia, la Ley Orgánica deberá eliminar la carga que tienen los administrados de agotar la vía administrativa antes de interponer el recurso contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe quedar*

como una opción a elección del interesado, pero no como un requisito de cumplimiento obligatorio”.

(...)De modo que, en el momento en que la propia Constitución establece el derecho de accionar (derecho de acceso a los órganos de administración de justicia), entendido como una garantía “universal” e “incondicional” y como tal es un “valor de aplicación” inmediata en los casos particulares. Toda limitación legal o doctrinal al ejercicio de este Derecho entonces debe reputarse que existe una interpretación antinómica en virtud de la cual debe prevalecer el mandato constitucional y en razón del principio de supremacía constitucional y así debe ser entendido. Como se observa, las normas transcritas en el epígrafe anterior establecen el agotamiento de la vía administrativa y la reclamación previa al Estado como un “requisito de la demanda” o “requisito de la acción” parten de la errónea premisa de considerar como sinónimos términos (acción y pretensión que no lo son), estamos en presencia de lo que el filósofo del Derecho ADOLFO REINACH llama “proposiciones apriorísticas del Derecho” que, independientemente de su consagración en el Derecho Positivo debe, por necesidad, respetarse en la tarea de interpretación (REINACH ADOLF: “Fundamentos apriorísticos del Derecho Civil, 1913). De modo que no se trata, el agotamiento de la vía administrativa y la reclamación previa, de un requisito de la “acción” y mucho menos de la demanda (pues la demanda técnicamente se trata de un documento que contiene o recoge la pretensión, o en otro sentido, como un acto de dar inicio al proceso). La acción no encuentra más requisito que ser persona humana y por ello mismo se trata de un “derecho fundamental” que debe ser respetado y garantizado como verdadera obligación de los órganos del Poder Público (artículo 19 constitucional), y al cual debe dársele una tutela “efectiva” sin formalismos no esenciales (artículos 26 y 257 constitucional).(...)

(...)La consecuencia inmediata de las anteriores consideraciones está en la aplicación inmediata y no programática de las disposiciones constitucionales que permiten el libre y universal derecho de accionar como integrante del derecho a una tutela judicial efectiva, sin más limitaciones que las que establezca la propia Constitución, con lo cual esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en inmediata aplicación de este principio aún para los casos que se encuentren en curso establece que no es necesario el agotamiento de la vía administrativa, o la reclamación administrativa previa, previstas en los artículos 84, ordinal 5º y 124, ordinal 2º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de

Justicia, 15 de la Ley de Carrera Administrativa, y 93 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 32 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, y 36 de la Ley de la Procuraduría General de la República, dejando a salvo las potestades de autotutela administrativa que corresponden a los órganos de la Administración Pública en todos sus niveles, y como una opción por parte de los justiciables y administrados de agotar o no esa fase, sin que en ningún momento pueda ser causal de inadmisibilidad de la acción, demanda o pretensión. Todo esto en preferente aplicación inmediata de los artículos 2 (Preeminencia de los derechos fundamentales), 7 (primacía de la Constitución), 19 (obligación de garantizar el goce y ejercicio de los derechos), 26 (derecho de accionar y tutela efectiva), 257 (prevalencia de la justicia sobre las formalidades no esenciales del proceso).(...)"

En esta sentencia se consideró que el agotamiento de la vía administrativa a los efectos de poder admitir la pretensión por la vía jurisdiccional era innecesaria y a su vez conculcaba el principio a la "Tutela Judicial Efectiva" en su contenido de "Acceso a la Jurisdicción". Estableciéndose tal presupuesto como un vía opcional, como ya lo han plasmado ciertas leyes de la República. Sin embargo, desde el punto de vista del Tribunal Constitucional Español, dicho agotamiento no vulnera tal principio, y así lo explica Junoy (1993:46):

"(...)La necesidad de trámites previos al proceso en ningún caso excluye el reconocimiento jurisdiccional, tan solo supone un aplazamiento de la intervención de los órganos judiciales.

Por ello, es completamente compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva la exigencia de tales trámites previos, que impliquen la búsqueda de una solución extraprocesal de la controversia, como son los de conciliación o reclamación administrativa previa. La finalidad de este último trámite es poner en conocimiento del órgano administrativo el contenido y fundamento de la pretensión formulada y darle ocasión de resolver directamente el litigio, evitando así la necesidad de acudir a la jurisdicción(...)."

Tal vez, dicho agotamiento para la República Española no ha traído la dilación en la resolución del conflicto, hasta el punto de romper el principio de la justicia expedita, circunstancia esta que sí se evidencia en Venezuela, convirtiéndose tal requisito en un obstáculo injustificado a la resolución de los intereses planteados por los particulares, más que una solución extraprocesal de la controversia que en muchos casos no ha ocurrido.

Como ya se ha manifestado, el acceso a la jurisdicción –el derecho a la apertura del proceso- es un derecho prestacional de configuración legal, y por ende, para gozar de él, deben cumplirse los lineamientos legales que de manera *razonable* y *proporcional* ha colocado el legislador, a los efectos de no vulnerar este derecho en su núcleo esencial, ya que forma parte de los derechos fundamentales de una persona, por ello se ha formulado el llamado “principio favor actionis ó pro actione” concretado en el “antiformalismo” y la “subsanción de los defectos procesales” (Junoy,1997).

Las normas adjetivas imponen una serie de formalidades *esenciales* que llevan consigo lograr la seguridad jurídica de las partes. Sin embargo, dichas formas no deben convertirse en un elemento que obstaculice el derecho fundamental mencionado y con ello vulneren el valor “justicia”. En este sentido, dichas formalidades deben ser justificadas y proporcionales conforme a la finalidad para la cual se han establecido. Por ello el Tribunal Constitucional Español, señala: “los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer las garantías necesarias para los litigantes”(Junoy, 1997:49)

Ello trae como consecuencia que ante la existencia de un requisito y presupuesto procesal, el mismo debe ser interpretado en el sentido más

favorable y no de una manera restrictiva y formalista que traiga la vulneración del derecho fundamental de “acceso a la jurisdicción”; de allí el carácter antiformalista del principio *pro actione*.

Asimismo, con respecto a la subsanación de los defectos procesales, ha expresado Junoy (1997:51), siguiendo decisiones del Tribunal Constitucional Español, que el juzgador antes de rechazar una demanda o un recurso defectuoso, debe procurar la subsanación o reparación del defecto, siempre y cuando no dañe el principio de igualdad procesal y la regularidad del proceso. En este sentido, expresa: “(...)los defectos subsanables no pueden convertirse en insubsanables por inactividad del órgano jurisdiccional, debiendo éste advertir tempestivamente de su existencia al interesado para que subsane dichos defectos(...).”

En Venezuela se podría decir, es aplicable tal consideración que ha expuesto el Tribunal Constitucional Español con respecto a la subsanación de defectos procesales, sólo cuando el legislador permite dicha circunstancia, como por ejemplo, es el caso del despacho saneador a que hace referencia el artículo 124 y 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo o del artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

En estos casos, ante la omisión de advertencia por parte del Juzgador en la subsanación de algún defecto procesal, ocurriría la violación a la Tutela Judicial Efectiva. Tal es el caso de que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vez de hacer uso del despacho saneador ante un defecto procesal que haga imposible el acceso a la jurisdicción en su plenitud, decida inadmitir la pretensión propuesta.

Con respecto a éste punto, obsérvese la Sentencia No. 1503-02 de la Sala Constitucional de fecha 03-07-2002,

“(…) La norma contenida en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se aplica cuando del examen del expediente y de los documentos que han sido consignados ante el órgano jurisdiccional, se constata que el apoderado actor no acompañó recaudo alguno que sustente su pretensión, razón por la cual el tribunal, a los fines de resolver acerca de la admisibilidad de la acción, deberá necesariamente requerir a la parte actora o al presunto agravante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, prueba de lo alegado, la cual deberá consignarse en el lapso de cinco (5) días de despacho a partir de la notificación de la decisión que ordene la corrección.

Por otra parte, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señala las condiciones que debe cumplir la solicitud de amparo. Se trata de un conjunto de cargas procesales mínimas a ser cumplidas por la parte actora. Aunado a ello, el artículo 19 eiusdem facultata al Juez para ordenar la corrección de la solicitud de amparo si esta fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Estima la Sala que la disposición del artículo 19 es una norma rectora del proceso que instruye al sentenciador sobre la conducta a adoptar frente a determinadas inconsistencias en las peticiones de amparo, más dicha norma no puede ser usada como fundamento jurídico de la corrección frente a una causal no establecida en la Ley como lo es el requisito de presentar en copia simple o certificada la sentencia impugnada. Por ello, resultaría violatorio del derecho de acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva inadmitir la demanda de amparo con fundamento en una causal que no se encuentra consagrada en el texto legal. En estos casos deberá hacerse uso de la disposición consagrada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que otorga al sentenciador amplias facultades para ordenar a la parte actora la consignación del fallo impugnado o para recabarla del propio tribunal al que se le atribuyen las infracciones constitucionales (...).”

Ahora bien, con respecto a la llamada de la parte al proceso, con especial atención a los requisitos constitucionales de los actos de comunicación, tiene que ver es con las notificaciones, citaciones y emplazamientos, a los efectos de que la parte demandada pueda ejercer su derecho a la defensa; y la exigencia de la postulación, esta referido el derecho que tiene todo ciudadano a ser asistido por un letrado, es decir, por un profesional idóneo y habilitado para materializar la defensa técnica. Dichos puntos no serán analizados profundamente puesto que no son el objetivo general de la presente investigación.

En este sentido, se puede concluir que la Jurisdicción siendo un “Deber del Estado, canalizado a través de órganos independientes, predeterminados por la Constitución o la Ley, de resolver las *peticiones de derecho* que plantee todo aquel que tenga un interés, y cuya resolución tiene la posibilidad de adquirir firmeza, a los efectos de seguridad jurídica como uno de los fines del Derecho y susceptible de ejecución forzosa ante la eventual resistencia del obligado”. Y siendo un deber, todos tiene el derecho subjetivo de acceder a él, que es lo que se entenderá como el derecho a la jurisdicción -derecho de acción-, entendido éste como: “un derecho humano fundamental que materializa la jurisdicción como función-*deber* del Estado de resolver las pretensiones de relevancia jurídica que le sean planteadas por todo aquel que tenga un interés”.

Entendido como un derecho humano fundamental, ha sido plasmado en la Constituciones de los Estados y en Instrumentos Internacionales a los efectos de procurar su respeto por el mismo poder público, canalizado en lo que ha de llamarse el “Principio de la Tutela Judicial efectiva”.

Asimismo, el acceso a la jurisdicción –derecho de acción- como derecho humano fundamental debe canalizarse a través de los requisitos

y presupuestos legales que ha plasmado el legislador -y no órgano distinto a él- de manera razonable y proporcional; siendo entendido por ello como un derecho de “configuración legal”, sin que tales requisitos deban convertirse en un obstáculo que vulneren el núcleo esencial del derecho en referencia, lo que en caso de duda debe resolverse a favor de éste, de allí el principio “Pro Actione”.

CAPITULO II

CONFLICTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO ENFOCADOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 5 Y 469 DE LA LOT

A. CONFLICTOS COLECTIVOS DEL TRABAJO.

1. Definición.

Antes de entrar en la definición de conflicto colectivo del trabajo, es importante entender qué es un conflicto.

Según el Diccionario Jurídico Venezolano (2000:316), es: “Oposición de intereses en que las partes no ceden. Situación difícil. Situación de angustia que no permite reflexión ni raciocinio”.

Cuando se analiza dicha situación desde la óptica de las relaciones de trabajo, la connotación no es distinta de la planteada por el diccionario.

Efectivamente, cuando se habla de conflicto en el mundo laboral, debe entenderse que existe una oposición de intereses entre los actores de las relaciones de trabajo como son el empleador, ya sea, en su aspecto individual o colectivo, y los trabajadores organizados o no. Pero no sólo se debe su calificación de conflicto de trabajo por la categoría de los sujetos enfrentados, sino también por los motivos que dan origen a ello.

El origen de tal debe estar ligado al aspecto laboral, puesto que una pretensión jurídica intentada por un trabajador hacia su empleador por situaciones que no tienen conexión alguna a la relación de trabajo, no pueden entrar en la categoría de conflictos laborales, tal sería el caso de

una intimación por la existencia de un título cambiario. Obsérvese que aun y cuando existen entre ellos una relación contractual laboral, el motivo del conflicto no tiene conexión con esa relación, por lo tanto es lógico pensar, que el mismo no es del tipo laboral; en este sentido, el órgano administrativo, es decir, la Inspectoría del Trabajo, y menos el Tribunal con competencia laboral tienen injerencia en la resolución de ese conflicto, ya sea coadyuvando a que las partes lleguen a un acuerdo o imponiéndolo a través de una sentencia.

Asimismo, como lo afirma Bernardoni (2004), para que sea considerado colectivo, es necesario que afecte el interés de una colectividad indeterminada de trabajadores.

Aún y cuando el presente título solo va orientado al conflicto de trabajo típico o específico, la cual es el que se plantea entre trabajadores y patronos, sin embargo, es importante tener presente que la doctrina califica otro tipo de conflictos como de trabajo, distinto al planteado entre aquellos, tal es el caso de los dirigidos contra el Estado por trabajadores independientes; entre organizaciones profesionales y el Estado ó el que se genera entre dos o mas sindicatos –conflictos intersindicales-. Así lo expresa Bernardoni (2004:254):

“(…)si bien el conflicto colectivo de trabajo típico o específico, se plantea entre trabajadores y patronos, el mundo de hoy ha visto la frecuencia de los conflictos colectivos de trabajo dirigidos directamente contra el Estado, llamados conflictos políticos, así como la creciente informalización del mercado de trabajo, que produce fricciones y enfrentamientos entre trabajadores por cuenta propia y el Estado, debatiéndose la procedencia de su incorporación dentro de los límites del Derecho del Trabajo; además, en el ámbito de las relaciones del trabajo, se dan conflictos entre las organizaciones profesionales y el Estado, o entre dos o varios de ellas, admitiéndose por la mayoría de la doctrina su naturaleza laboral. En consideración a éste último aspecto, la mayoría de

los autores, aunque definen estrictamente al conflicto de trabajo, a la hora de clasificarlo admiten los conflictos intersindicales y aquellos entre los sindicatos y el Estado, como de trabajo.”

En el mismo sentido expresa Sapia (2002:8), al hacer referencia a este tipo de conflictos denominado por otro sector de la doctrina como “impropios”:

“La referencia alude un tipo de conflicto que alguna doctrina ha denominado acertadamente como de carácter impropio, puesto que no revelan la existencia de una disputa entre el sector empleador y el sector de los trabajadores. Se trata de los conflictos intersindicales, los conflictos intrasindicales, los conflictos de solidaridad y los de tipo políticos.”

Es por ello, que bajo este punto de vista, la autora Bernardoni considera que lo que caracteriza al conflicto colectivo del trabajo no está en los sujetos que lo integran –empleador y trabajador-, ya que puede estar enfocado entre actores distintos: Estado vs Trabajadores independientes; sino su objeto, el cual es, según Bernardoni (2004:260): “la conquista o defensas de derechos relativos al trabajo objeto del Derecho del Trabajo”.

Ahora, obsérvense algunas definiciones dadas por la doctrina, enfocado el conflicto de trabajo en sentido estricto y desde una perspectiva jurídica, o como lo llama Bernardoni (2004) “típico”, que es aquel que se plantea entre empleadores y trabajadores, dejando de lado el punto de vista planteado anteriormente, la cual se orienta no en un sentido jurídico sino en un sentido político-social:

Mario de la Cueva (citado por Díaz, 2003: 202) lo define como: “Las controversias que se suscitan con motivo de la formación, modificación, o cumplimiento de las relaciones de trabajo”

Krotoschin (citado por Bernardoni, 2004:252): “...*Las controversias de cualquier clase que nacen de una relación de Derecho Laboral, sea que esta relación se haya establecido entre un empleador y un trabajador individual (contrato individual de trabajo) o entre grupo de trabajadores y patronos (convención colectiva de trabajo)...*”(cursiva de la autora)

Cabanellas (citado por Bernardoni, 2004:253): “...*por conflicto de trabajo se entiende todo aquel procedente de la prestación de servicios retribuidos por el patrono al trabajador; esto es, derivados de la actividad laboral...*”(cursiva de la autora)

Alonso García (citado por Bernardoni, 2004:253): “...*toda situación jurídica de la alteración ocasionada en el desarrollo o extinción de una relación jurídica laboral, y que se plantea entre los sujetos de la misma, o entre las partes de convenio colectivo...*”(cursiva de la autora)

Ahora bien, siendo que todo conflicto, tal como lo define el diccionario, encierra una oposición de intereses, que no necesariamente, en el caso de las relaciones laborales es ocasionado por la lesión a ese interés, y por ello el autor de la presente investigación se aparta de la opinión emitida por Bernardoni (2004) al respecto –punto que será tratado en el ítem siguiente-; asimismo, no sólo importa la condición de los sujetos involucrados para su calificación de laboral, sino también el objeto o motivo que da origen al mismo; y por último, basta que ese interés involucre a un número indeterminado de trabajadores para darle la calificación de colectivo. Se puede definir el conflicto colectivo de trabajo –típico o específico- en los siguientes términos:

Oposición de intereses que se generan entre un empleador y un grupo de trabajadores –organizados o no formalmente-, con la finalidad de crear, modificar o hacer cumplir las condiciones de trabajo previamente establecidas por las partes.

Efectivamente, el conflicto de trabajo involucra intereses contrapuestos entre los actores sociales laborales, entendiéndose por estos: empleador y trabajadores, ya sea, que estén agrupados en coaliciones o sindicalmente; asimismo, esos intereses contrapuestos son de naturaleza laboral y están orientados a *crear* condiciones y regulaciones de trabajo que antes no existían o que sólo estaban regidas por el mínimo establecido legalmente; *modificar* dichas condiciones o regulaciones a los efectos de mejorar el nivel del trabajador desde el punto de vista social y económico, materializando de esta manera el principio de progresividad a que hace referencia el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y hacer *cumplir* las mismas ante un desacato de la norma por parte del empleador.

2. Causas de su Origen.

Al hacer referencia a la definición de conflicto colectivo de trabajo en el punto anterior, y dentro de la cual se planteo una por parte del autor de la presente investigación, se delinea la finalidad u objeto por la cual los sujetos que viven de la fuerza de su trabajo encausan un conflicto, de allí, se puede deducir la causa que lo origina.

Y en este sentido, cuando se busca crear, modificar o hacer cumplir las condiciones de trabajo o la normativa que la regula, es sencillamente, porque los trabajadores pretenden *dignificar sus condiciones sociales y*

económicas, ya sea, mejorándolas ó haciendo respetar las ya reivindicadas por su esfuerzo y lucha.

Ahora bien, Bernardoni (2004:242) opina que el conflicto nace por la lesión de un interés; planteándola en los siguientes términos: “El conflicto de trabajo se expresa por la lesión de un interés surgido con ocasión del desempeño del trabajo, desencadenante de una reacción por parte del sujeto afectado, dirigida a reparar la lesión mediante la satisfacción de su interés”.

Sin embargo, es una posición no compartida por el autor de la presente investigación.

Si bien es cierto, el conflicto, en ciertos momentos nace bajo esa premisa, como es el caso del incumplimiento de una convención colectiva o cuando el empleador establece condiciones de trabajo que no favorece a los trabajadores; no así en el supuestos de quererse crear regulaciones o condiciones que antes no existían, como por ejemplo, cuando una organización sindical plantea la discusión de una convención colectiva.

En este último caso, no ha existido lesión de algún interés, sólo es la materialización de un derecho que tiene todo trabajador a mejorar sus condiciones sociales y económicos –principio de progresividad-; sin que ello quiera decir que las que posee actualmente les sean desfavorables.

3. Objetivo del Conflicto.

Según la legislación venezolana, el objetivo del conflicto esta orientado: a. para modificar las condiciones de trabajo; b. para celebrar una convención colectiva ó reclamar su cumplimiento; y, c. para oponerse

a que se adopten medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento.

Así se deduce del artículo 469 y 475 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual expresan lo siguiente:

Artículo 469. La negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre uno (1) o más sindicatos de trabajadores y uno (1) o más patronos, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento, se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

Artículo 475. El procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones en el cual el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo; para que se celebre una convención colectiva o se de cumplimiento a la que se tiene pactada.

Obsérvese que algunas definiciones de la doctrina ya citados, van orientadas en la misma tónica que el legislador, puesto que plantean como objetivo del conflicto los ya enunciados; así se tiene por ejemplo la de Mario de la Cueva.

4. Clases de Conflictos.

Según Díaz (2003), los conflictos de trabajo tanto desde el punto de vista teórico como práctico, se pueden agrupar en dos categorías: a. conflictos individuales y colectivos; y, b. conflictos jurídicos o de derechos y económicos o de intereses.

Con respecto al primero, para diferenciar uno de otro, Bernardoni (2004:270), expresa:

“...La nota que caracteriza a los conflictos colectivos de trabajo, diferenciándolos de aquellos individuales, radica en el interés controvertido, que debe ser un interés profesional, un interés general, a diferencia del interés que está en juego en un conflicto individual que es siempre un interés particular, concreto...”(cursiva de la autora)

Según la autora citada, ese criterio es el empleado por la mayoría de la doctrina. Sin embargo, Manuel Alonso García (citado por Bernardoni, 2004:270), busca diferenciar ambos de la siguiente manera:

“...el conflicto individual es aquel cuyas consecuencias o efectos, derivados de la pretensión que se actúa, únicamente alcanzan a quienes intervienen como sujetos en él; en tanto que se puede definir el conflicto colectivo como aquel cuyas consecuencias o efectos, derivados asimismo de la pretensión que encierra, se extienden a personas no sujetos del conflicto que resultan afectados esencialmente por el mismo...”(cursiva de la autora)

Bajo el mismo punto de vista que Bernardoni; a los efectos de diferencias los conflictos individuales de los colectivos, Díaz (2003:202), expresa:

“Los individuales afectan a un solo trabajador, en tanto que los Colectivos afectan a una comunidad de trabajadores unidos por la empresa o por la profesión. Cuando por ejemplo, un trabajador demanda ante un tribunal a su empleador, reclamando el pago de salarios retenidos, o la diferencia de prestaciones sociales, o la calificación de su despido, se está frente a un conflicto individual; porque en ese caso, el Estado administra justicia con un propósito claramente definido, cual es el de tutelar derechos de un individuo en particular. Se trata de una controversia entre dos sujetos (patrono y trabajador) de

una relación laboral individual. En tanto que los conflictos giran alrededor de los derechos e intereses de la categoría profesional, valga decir, de un conjunto indeterminado de trabajadores que prestan sus servicios en una misma organización o en una rama de actividad determinada, o de los derechos e intereses de una específica organización u organización gremial”.

Efectivamente, en un conflicto individual de trabajo opera un interés particular. La resolución del mismo sólo beneficia de manera directa al trabajador involucrado en el mismo, irradiando sólo de manera indirecta dicho beneficio en provecho de otros sujetos, cual sería el caso que un dependiente solicite ante un Tribunal se condene a su empleador el pago de un beneficio laboral que era de dudosa procedencia. En el momento que el Juez dilucida la certidumbre del derecho, declarándolo y condenando a su pago, un empleador diligente, otorgará el beneficio aquellos que cumplan la misma condición que el trabajador demandante a los efectos de evitar futuros litigios que traerían consigo costos innecesarios, así como cualquier otro tipo de incidentes.

Mientras que el colectivo involucra intereses generales, no orientado su resolución a beneficiar *directamente* a un trabajador, sino a un grupo de ellos. Cual sería, por ejemplo, el caso de querer crear condiciones que estén por encima del mínimo establecido por la Ley Sustantiva Laboral a través de un convenio colectivo. En este caso, la creación de este instrumento legal autónomo involucra los intereses de todos los trabajadores de la empresa e inclusive aquellos que ni siquiera se han enrolado en la misma; asimismo, la suscripción de él por las partes implicadas, benefician a todos los dependientes, en las mismas condiciones explicadas, es decir: a los que se encuentren laborando como aquellos que ingresen con posterioridad.

Ahora bien, con respecto a la segunda clase de conflictos, es decir, los jurídicos o de derechos y los económicos o de interés, obsérvese qué opina la doctrina a los efectos de diferenciar uno de otro:

Díaz (2003:204):

“Los Conflictos Jurídicos o de Derecho ocurren por la interpretación o aplicación de normas preexistentes de cualquier naturaleza: legales, contractuales o usuales; siempre que el derecho cuestionado afecte el interés colectivo. En tanto que los Conflictos Económicos o de Intereses ocurren porque las partes pretenden crear una norma contractual; pretenden modificar normas ya existentes; pretenden modificar las condiciones de trabajo; o reclamar el cumplimiento de la convención colectiva; u oponerse a medidas que afecten a los trabajadores”.

Bernardoni (2004:492):

“La doctrina tradicional ha considerado como conflictos de intereses los que se plantean entre trabajadores y patronos por la modificación o creación de condiciones de trabajo, mientras que los derecho se fundamentan en diferencias relacionadas con la aplicación o interpretación de las normas convencionales o legales que rigen las relaciones de trabajo...”(cursiva de la autora)

Sappia (2002:6):

“Resulta útil establecer cuales son los elementos diferenciadores entre los conflictos colectivos de interés de derecho. Los primeros involucran a los que se originan en la pretensión de uno de los dos sectores de la relación, de introducir modificaciones en el plexo normativo vigente, que tienden a generar un nuevo marco capaz de satisfacer expectativas hasta ese momento inexistentes. La incorporación de nuevas formas de remuneración, o expresiones novedosas en orden a la jornada o los descansos o la más común reclamación de mejores salarios, pueden ser algunas de las

maneras en que los trabajadores introducen una situación de conflicto de tipo económico.(...)

Por otro lado, el conflicto jurídico o de derecho, nada tiene que ver con un cambio, sino por el contrario, implica la protesta por incumplimiento de lo que esta normado, de aquello que es ley exigible para las partes de la relación. La pretensión del sector que lanza la reclamación no es la de modificación, sino la observancia de lo que está estatuido con antelación, y que la contraparte incumpliría.”

Guzman (2006: 483):

- a) *Conflictos jurídicos o de derecho*, que versan sobre la interpretación o aplicación de normas preexistentes de cualquier naturaleza: legales, contractuales o usuales, si el derecho cuestionado afecta el interés colectivo.
- b) *Conflictos económicos o de intereses*, que tienden la creación de nuevas normas contractuales, o la modificación o cumplimiento de las normas ya existentes. Son especie de este género la huelga y el lock-out.”

La doctrina patria, tal como Díaz y Guzmán, al diferenciar los conflictos económicos o de interés de los jurídicos o de derecho, prácticamente están haciendo referencia al artículo 469 y 475 de la Ley Orgánica del Trabajo; por lo que diferencian ambos tipos de conflictos, con base a lo estipulado por el legislador; situación que merece una observación importante –la cual se hará en el punto 5 de éste capítulo-, por las repercusiones que pudiere acarrear desde el punto de vista del Derecho Constitucional Procesal, específicamente, de la Tutela Judicial Efectiva.

Ahora bien, volviendo al punto analizado, y desde la perspectiva del autor de la presente investigación, debe entenderse como conflictos de interés o económicos: aquellos en la cual *no está involucrada la interpretación o aplicación de norma jurídica alguna*; actuando el empleador conforme al derecho, no obstante, su actuación lesiona el interés de los trabajadores o sin lesionar alguno, les esta coartando el

derecho de mejorar su calidad de vida, sustentando éste en el principio de progresividad. Y como conflictos jurídicos o de derechos: aquellos en los cuales sí existe la lesión de un derecho subjetivo, haciendo necesaria la intervención de un órgano especializado del Estado que interprete u ordene la aplicación del derecho.

Efectivamente, un empleador en virtud del *ius variandi*, puede modificar las condiciones de los trabajadores o adoptar cierto tipo de medidas, que no obstante, estando su conducta dentro de los parámetros de la ley, puede estar afectando o lesionando el interés de aquellos, tal sería el caso, de una modificación arbitraria del horario de trabajo. El legislador no prohíbe al empleador modificar el horario de trabajo, pero si dicha circunstancia afecta a los trabajadores, nace un conflicto de interés y no jurídico, puesto que no hay lesión a ninguna norma heterónoma o autónoma que establezca un modo de actuación.

Asimismo ocurre en el caso que se quiera plantear la negociación de un convenio colectivo. Obsérvese que el empleador puede estar cumpliendo a cabalidad la legislación del trabajo, por lo tanto, no está irrumpiendo el derecho, por el contrario, está canalizando su conducta a través de él, pero su negativa a querer negociar mejores condiciones de vida para los trabajadores, aún y cuando las actuales no los estén afectando, genera un *conflicto económico o de interés*

Ahora bien, si existe el incumplimiento de una norma jurídica, sea cual fuere su fuente, allí nace un conflicto jurídico o de derecho, ya que se están quebrantando formas de conductas de obligatorio cumplimiento, establecidos por fuentes heterónomas o autónomas.

5. Conflictos Plasmados en la Norma: Jurídicos o de Derecho ó Económicos o de Interés.

Lo ya analizado anteriormente permitirá dilucidar la interrogante plasmada en el presente punto.

Se dijo que los conflictos económicos o de interés no necesariamente llevan consigo el quebrantamiento de una norma jurídica o la interpretación de la misma –la cual sí ocurre en los jurídicos o de derecho– por cuanto la actuación del empleador afecta a los trabajadores, no obstante, estar ajustada su conducta al derecho.

La norma del artículo 469 y 475 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual expresan lo siguiente:

Artículo 469. Las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre uno (1) o más sindicatos de trabajadores y uno (1) o más patronos, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento, se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo.

Artículo 475. El procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones en el cual el sindicato expondrá sus planteamientos para que el patrono tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo; para que se celebre una convención colectiva o se de cumplimiento a la que se tiene pactada.

Si se analiza la clase de conflictos que plantean las normas citadas, bajo la perspectiva de la doctrina patria, tal como Díaz y Guzmán, se diría que todos son económicos o de interés; pero bajo la óptica orientada por

el autor del presente trabajo, en dichas normas, técnicamente están plasmados conflictos económicos o de interés y jurídicos o de derecho.

Los primeros se observan cuando el legislador expresa: “para modificar las condiciones de trabajo”; “para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento”; “para que se celebre una convención colectiva”.

En estos, tal como se orientó líneas arriba, no es necesaria la violación de normas preexistentes, por el contrario, el empleador puede estar cumpliendo a cabalidad con el ordenamiento jurídico, sin embargo, la posición asumida para con sus trabajadores puede estar lesionando un interés colectivo, o coartándole el derecho a mejorar sus condiciones de vida.

Los segundos: “para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas”.

En estos, sí se requiere una interpretación y aplicación de normas preexistentes de cualquier naturaleza, y siendo así, en la resolución de éste tipo de conflictos se requiere *la jurisdicción*, entendida por ésta, según la definición planteada:

“Deber del Estado, canalizado a través de órganos independientes, predeterminados por la Constitución o la Ley, de resolver las *peticiones de derecho* que planteen todo aquel que tenga un interés, y cuya resolución tiene la posibilidad de adquirir firmeza, a los efectos de seguridad jurídica como uno de los fines del Derecho y susceptible de ejecución forzosa ante la eventual resistencia del obligado”.

Ahora bien, pareciera que el punto de vista planteado en lo que respecta a las normas estudiadas, es la misma del legislador, es decir, entender los conflictos colectivos de interés como aquellos que se plantean para: modificar las condiciones de trabajo; oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento; y para que se celebre una convención colectiva; y los jurídicos o de derecho para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas. Y ello se observa en el primer aparte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo: “(...)Los conflictos colectivos sobre intereses y los que se plantean para exigir el fiel cumplimiento de los compromisos contraídos se tramitarán de acuerdo con lo pautado en el Título VII de esta ley.”

Obsérvese que el legislador, por una lado, hace referencia a los conflictos colectivos de interés y por el otro a los que se plantean para exigir el cumplimiento de los compromisos previamente asumidos, estos últimos, técnicamente conflictos jurídicos o de derechos, y un ejemplo de ello sería la reclamación en el cumplimiento de una convención colectiva.

Sin embargo, el tratamiento en cuanto al órgano que conocerá del conflicto y el procedimiento a seguir, para el caso del reclamo de compromisos contraídos, lo enfoca como si fuera un conflicto económico o de interés.

6. Consecuencia que Trae Consigo, Desde el Punto de Vista Procesal, la Calificación del Conflicto Colectivo.

Calificar el conflicto no es meramente una clasificación doctrinal sin alguna importancia práctica, por el contrario, ello sirve a los efectos de determinar cuál es el órgano del poder público quien conocerá del mismo, ya sea, para resolverlo directamente o coadyuvar a ello; y el

procedimiento a seguir; por lo menos en los conflictos de interés y jurídicos, ya que la calificación de individuales o colectivos sólo refleja el interés protegido en dicho conflicto, y esto en el Derecho venezolano, ya que, según advierte Bernardoni (2004), en Italia y Francia la distinción de estos sí tiene importancia a los efectos del procedimiento aplicar, por cuanto los jueces no son competentes para conocer sobre los conflictos colectivos, sean de interés o jurídicos.

Ahora bien, se ha entendido que los conflictos jurídicos o derecho deben ser conocidos por la *jurisdicción*, en tanto que los de interés o económico por la administración; asimismo, los primeros se canalizan a través del *proceso*, mientras que los segundos por medio de un procedimiento administrativo a los efectos de lograr una *conciliación* o un *arbitraje*.

Y ello se observa del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual expresa: “Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;(…)”.

Ahora, saber cuales son los asuntos que corresponde a la conciliación y al arbitraje, es un punto a la cual se dedicará el capítulo siguiente.

Retomando la idea planteada, saber bajo qué tipo de conflicto se encuentran las partes, permitirá establecer qué órgano del Estado lo conocerá y cuál mecanismo de resolución debe seguirse.

Sí es económico o de interés, lo conocerá la Administración Pública a través de la Inspectoría del Trabajo y por medio de un procedimiento orientado a la conciliación de las partes; y en caso de fallar este, la exhortación a un arbitraje; sin embargo, está en la voluntad de la parte

afectada no hacer uso de éste último –salvo excepciones- e irse a la huelga.

Como se observa, el legislador coloca en mano de los mismos particulares la resolución de su problema, ya sea, conciliando ó utilizando un mecanismo de presión consistente en el cese de actividades; salvo que acepten el exhorto a un arbitraje donde ya no son las partes que dan resolución al conflicto sino un tercero; siendo potestativo hacer uso de él – salvo excepciones-. De allí el principio en Derecho Colectivo de la conciliación obligatoria y el arbitraje facultativo.

Ahora bien, cuando el conflicto es jurídico o de derecho, es el Poder Judicial a través de los Tribunales de la República quienes son llamados a conocer del mismo, por medio del proceso.

Sin embargo, si se analiza el artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo, se observará que el legislador rompe este esquema, ya que de manera imperativa establece la resolución de un conflicto jurídico o de derecho – la exigencia de los compromisos asumidos- por un órgano y un procedimiento orientado, según lo estudiado, a los económicos o de interés.

Aún y cuando la tendencia del legislador en tratar un conflicto jurídico o de derecho –caso de la exigencia de compromisos asumidos- bajo un órgano y procedimiento destinado a los económicos o de interés, caracterizado porque sean, en lo posible, las mismas partes la que den resolución a su problema; ha sido, por la trascendencia social y política que puede acarrear el mismo (Bernardoni, 2004); sin embargo, pudiere estar soslayando derechos y garantías reconocidos y plasmados en la Carta Magna e Instrumentos Internacionales -punto que será tocado en el capítulo IV de la presente investigación-.

CAPITULO III
MATERIAS QUE PERTENECEN A LA CONCILIACIÓN Y AL
ARBITRAJE CUYA COMPETENCIA NO ESTÁ
ATRIBUIDA A LOS TRIBUNALES LABORALES, DESDE
LA PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 29 DE LA LOPT EN
SU NUMERAL 1ERO.

En el presente capítulo se analizarán dos instituciones que forman parte de lo que ha sido denominado “medios alternativos de resolución de conflictos”, entendiendo por este, aquellos mecanismo que sin hacer uso de una sentencia como medio tradicional que pone el Estado para la resolución de las controversias que se susciten entre dos partes con intereses contrapuestos, cumple el mismo objetivo de aquella.

Han sido tan importante estos mecanismo de resolución de conflictos, tanto desde el punto de vista de la descongestión del sistema judicial tradicional, como de la conveniencia en que sean las mismas partes la que resuelvan sus controversias –caso de la mediación y conciliación-, por cuanto ello mengua la molestia que trae consigo la declaratoria en una sentencia de un vencedor y un perdedor; que hasta la misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé como línea de acción al legislador el contemplar tales mecanismos; y así lo expresa en el único aparte del artículo 258: “La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.

Es el caso de la conciliación y el arbitraje, la cual se pasa de seguidas a su respectivo análisis

A. LA CONCILIACIÓN.

1. Definición:

Con respecto a la conciliación expresa:

Cabanellas (1976:449):

“Avenencia de las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito. El *acto de conciliación* (v.e.v), procura la transigencia de las partes, con el objeto de evitar el pleito que una de ellas quiere entablar. No es en realidad un juicio, sino un acto, y el resultado puede ser *positivo o negativo*. En el primer caso, las partes se avienen; en el segundo, cada una de ellas queda en libertad para iniciar las acciones que le correspondan”.(cursiva del autor)

Sadd (2005): “Es un medio alternativo de resolución de conflictos donde las partes, por sí o representadas por sus letrados, intentan dirimir su conflicto bajo la dirección de un tercero”.

Boueiri y Salazar (2004): “es muy parecida a la mediación, la diferencia radica en el nivel de participación activa por parte del tercero. Es decir, el conciliador puede emitir opiniones cuando las partes no pueden solucionar rápidamente sus asuntos”.

Romberg (1997:342): “Es la convención o acuerdo a que llegan las partes por mediación del juez durante el proceso, que pone fin al litigio y tiene los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.(...) es uno de los modos de autocomposición procesal, por el cual se llega a una solución convencional y no *jurisdiccional* de la litis”(cursiva del autor citado).

Obsérvese que lo que caracteriza a la conciliación, es que son las mismas partes la que ponen fin a la controversia con la ayuda de un tercero, quien puede emitir opinión a los efectos de que aquellas puedan llegar a un acuerdo, generalmente materializado en un acuerdo transaccional que tiene los mismos efectos que una sentencia que emana de un Tribunal de la República.

2. Materias Pertenecientes a la Conciliación.

Si se analiza el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, al establecer: “El Juez no podrá excitar a las partes a la conciliación cuando se trate de materias en las cuales estén prohibidas las transacciones”. Se podrá deducir del mismo, cuales son las materias que pertenecen a la conciliación

Ahora bien, ¿cuáles serían las materia prohibidas a transar?.

En este caso, el legislador esta haciendo referencia aquellas donde estén interesado el orden público y las buenas costumbres; en este sentido, es materia de conciliación todos los asuntos que no involucren tales intereses.

Esto es a lo que llama parte de la doctrina límites objetivos de la conciliación. En este sentido, Romberg (1997:344), lo expresa en los siguientes términos:

En cuanto a los límites objetivos de la conciliación, nuestro código no la admite en las materias en las cuales están prohibidas las transacciones (Art. 258), lo que tiene lugar en los conflictos sobre derechos o relaciones *indisponibles*, que son todos aquellos en que esta presente no sólo el interés privado de las partes, sino también el orden público o las buenas costumbres, como lo relativo al estado y capacidad de las

personas (matrimonio, divorcio, separación de cuerpos, filiación, tutela, curatela, emancipación, interdicción, inhabilitación, etc).

Tomando en cuenta lo afirmado, no es materia de conciliación, entre otros: la materia penal, salvo el caso de los acuerdos reparatorios; los asuntos de familia, con sus respectivas excepciones; los derechos laborales, cuando se quiere transar por debajo del mínimo legal o contractual o violar un derecho adquirido.

3. Materias que desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Trabajo, pertenecen a la conciliación.

Ya se dijo líneas arriba cuáles son los asuntos que pertenecen a la conciliación, y recordando lo expresado: todo aquello donde no este involucrado el orden público y las buenas costumbres.

Sin embargo, no es el punto de vista del legislador cuando en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo expresa: “Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: 1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje(...);” por cuanto en el ámbito del trabajo, hay asuntos donde existe la posibilidad legal de conciliar y transar y no obsta para que sea un Tribunal de la República con competencia en la materia que conozca del mismo.

Este artículo hay que concatenarlo con el 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cual expresa: “(...)Los conflictos colectivos sobre intereses y los que se planteen para exigir el fiel cumplimiento de los compromisos

contraídos se tramitarán de acuerdo con lo pautado en el Título VII de esta Ley”.

Ahora bien, en el Título VII de dicha Ley se encuentra el artículo 469 y 475 que expresa cuales son esos tipos de conflictos, la cual, como ya se dijo líneas arriba, vendrían a ser: a. para modificar las condiciones de trabajo; b. oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento; c. para que se celebre una convención colectiva.

Asimismo, se encuentra, según las normas de la Ley Orgánica del Trabajo a la cual se hizo referencia, aquellos conflictos que surgen con la finalidad de *reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas* – reclamar los compromisos contraídos, según el artículo 5-, que técnicamente no son de interés o económico, sino de derecho o jurídicos, -y así lo hace ver el legislador cuando utiliza el copulativo “y” para diferenciar los de interés de ellos- pero su intención fue darle el mismo tratamiento de los económicos a los efectos de su resolución, es decir, por el órgano administrativo y por un procedimiento canalizado hacia la *conciliación* o al *arbitraje*, desarrollados estos en la sección tercera y cuarta del Capítulo II del Título VII de la Ley Sustantiva Laboral.

Esta normativa de la Ley Orgánica del Trabajo da la respuesta a la interrogante plasmada en el presente título, es decir, los asuntos a que hace referencia el legislador en el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de la cual no pueden ser conocidos por los Jueces con competencia laboral, son aquellos que encierran un conflicto de interés; y de acuerdo a una interpretación literal del artículo 5 de la Ley Sustantiva Laboral, tampoco puede ser conocido por dichos

jueces, aquellos asuntos donde se estén violentando compromisos asumidos –verbigracia, el incumplimiento a una convención colectiva-.

Estos asuntos a que hace referencia la norma de la Ley Orgánica del Trabajo, deben ser canalizados por un procedimiento conciliatorio –que además es obligatorio- y ante un organismo de la Administración Pública –Inspectorías del Trabajo-. Lo que traería como consecuencia no una falta de competencia para conocer de ellos por parte de un Tribunal Laboral, como lo expresa el legislador en el artículo 29 de la Ley Adjetiva Laboral, sino de jurisdicción, ya que son asuntos que de acuerdo a la Ley, debe ser conocido por un órgano distinto del Poder Judicial.

En este sentido, un Tribunal de la República no pudiere conocer sobre peticiones que versen: a. para modificar las condiciones de trabajo; b. oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento – salvo que sean medidas en contravención al derecho, por cuanto se convertiría en un conflicto jurídico-; c. para que se celebre una convención colectiva; y d. reclamar los compromisos contraídos –técnicamente un conflicto jurídico y cuya resolución o no por el poder judicial, será analizada en el último capítulo del trabajo-.

El que no pueda conocer el órgano jurisdiccional de tales pretensiones tiene su razón de ser, ya que como se dijo en el primer capítulo de la presente investigación, la jurisdicción es:

“El deber del Estado, canalizado a través de órganos independientes, predeterminados por la Constitución o la Ley, de resolver las *peticiones de derecho* que planteen todo aquel que tiene un interés, y cuya resolución tiene la posibilidad de adquirir firmeza, a los efectos de seguridad jurídica como uno

de los fines del Derecho y susceptible de ejecución forzosa ante la eventual resistencia del obligado”.

Obsérvese que se hace referencia es a peticiones de derecho, es decir, la función del órgano jurisdiccional va dirigida es a resolver peticiones donde estén involucrados normas jurídicas, conductas preestablecidas por el legislador e inclusive por las mismas partes. El Juez determinará si la conducta del individuo está o no ajustada a la norma y con ello aplicará la consecuencia jurídica.

Cuando se hace referencia a conflictos de interés o económicos, no pueden ser conocidos por el órgano jurisdiccional puesto que no se trata de determinar si la conducta de una de las partes está o no ajustada a la conducta preestablecida por el legislador o por ellas mismas; sino de conductas, que aún y cuando estén ajustadas a la norma, pudiere estar afectando el interés de los trabajadores –caso de solicitar el cambio de ciertas medidas- ó que sin estar afectando dicho interés, se busca enaltecer uno de los principios que informan al Derecho del Trabajo, cual es el principio de progresividad –caso de solicitar la conformación de una convención colectiva-.

Ello se observa y era claro en la derogada Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, cuando en su artículo 1ero expresaba:

Artículo 1: Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y en todo caso, *las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de las disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo*, serán sustanciados y decididos por los Tribunales del Trabajo que se indican en la presente Ley. (cursiva añadida)

Obsérvese que el mismo legislador de manera expresa contempla que todo asunto contencioso que tenga como objetivo la aplicación de normas legales o convencionales, serán conocidas por el órgano jurisdiccional con competencia laboral. Y ello es así, puesto que está acorde con la definición de lo que es jurisdicción, e inclusive, lo que la misma palabra traduce: “decir el derecho”.

Haciendo una interpretación en contrario sensu de la norma en comento, se puede concluir que aquellos asuntos que no susciten la aplicación de disposiciones legales ni convencionales, no pueden ser conocidos por el órgano jurisdiccional, sino por el órgano administrativo; puesto que sería un contrasentido, que un órgano perteneciente al poder judicial quien es el que ostenta la función jurisdiccional, conozca de asuntos donde no este de por medio aplicación o interpretación del derecho.

El hecho de que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en el numeral 1ero del artículo 29, no contemple la expresión: “(...)y en todo caso, las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de las disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo(...)”, tal como lo hacía la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, no es indicativo de que la intención del legislador fue darle jurisdicción y competencia a los Tribunales Laborales, para conocer de asuntos donde no se involucre la aplicación o interpretación de conductas preexistentes plasmada en normas, puesto que como ya se dijo, sería un contrasentido que un órgano jurisdiccional conozca de pretensiones que no lleven consigo la aplicación del derecho.

Ahora bien, en los conflictos de interés o económicos, el legislador busca que la problemática sea resuelta por las mismas partes, ya que hace obligatorio en primer lugar la conciliación; y en caso de esta posibilidad fallar, ofrece un arbitraje; y en última instancia, un mecanismo

de presión propio del Derecho del Trabajo como es la huelga, entendiéndose por esta, según el artículo 494 de la Ley Orgánica del Trabajo como “(...)la suspensión colectiva de las labores por los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo” y según Díaz (2003:213):

“Interrupción colectiva del trabajo, llevado a cabo por los trabajadores de una empresa, o establecimiento, o faena, o conjunto de empresas, establecimientos, o faenas, para inducir al empleador a tomar o dejar de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo; o en solidaridad con otros trabajadores del mismo oficio, arte, profesión o gremio en su lucha de intereses contra su patrono.”

En este sentido, esa circunstancia de plantear como obligatorio para los conflictos colectivos de interés o económicos: en un primer momento la conciliación y en caso de fallar esta: el arbitraje, antes de llegar a la suspensión de labores por medio de la huelga, es porque la legislación venezolana se basa en el principio de la conciliación obligatoria y del arbitraje facultativo (Díaz, 2003).

“Por aplicación de este principio, no se pueden dejar de cumplir los trámites destinados al acercamiento de las partes, antes de suspender las labores o de “declarar la huelga o el *lock-out*”. La Ley Orgánica del Trabajo es categórica en ello, al establecer por su contravención, sanciones de arresto policial”(Díaz, 2003:208)

Y ello también tiene su razón de ser. En aquellos casos en que no exista una norma preestablecida para resolver un conflicto, que es la manera como se ha interpretado los conflictos de interés o económicos; el Estado a través de sus órganos no puede dirimir tal, puesto que no hay

norma que aplicar o interpretar, más aún cuando existe el llamado “Estado de Derecho”, donde el mismo ente Estatal debe someterse a las leyes que él mismo a creado

En este caso, no queda otra que sean las mismas partes las que busquen solución a sus problemas por medio de la conciliación. Y es tan cierta dicha afirmación, que en caso de fallar aquella, son ellas mismas las que pueden decidir ir a un procedimiento arbitral –salvo cuando se esté afectando el interés público- y de no ser así, proceder a la huelga. Pero repárese, que el legislador no da la opción de plantear el conflicto por la vía jurisdiccional una vez agotada aquella –la conciliación-; ya que como se ha dicho en reiteradas oportunidades, no se está en busca de aplicar o interpretar el derecho –normas de conductas previamente establecidas-.

En conclusión, los asuntos a que hace referencia el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que pertenecen a la conciliación, no son los que interesan al orden público y las buenas costumbres; sino los que según la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 5, 469 y 475, son destinados a ser resueltos por éste mecanismo, con ayuda de la administración pública, es decir, los conflictos de interés o económicos. Estos son los conflictos que pertenecen a la conciliación.

B. EL ARBITRAJE.

1. Definición.

Cabanellas (1976:208): “Toda decisión dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o un asunto. Integra un sistema de obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero ateniéndose a derecho o justicia”.

El Dr. Frank Gabaldón (citado por Balzán, 2002: 205):

“Institución mediante el cual el derecho procesal faculta a quienes se encuentren en controversia para designar los jueces que la resolverán y para establecer los mecanismos con que éstos deberán actuar para lograrlo, quedando las partes obligadas por imperio de la Ley a respetar el fallo que dicten.”

Feo (citado por Balzán, 2002:205): “el arbitramento o juicio de arbitramento no es otra cosa que la decisión del negocio controvertido entre las partes ante personas privadas a cuya decisión lo someten por mutuo consentimiento”.

Dr. Duque Sánchez (citado por Balzán, 2002:205):

“en una palabra puede decirse que comprometer en árbitros es la facultad que tienen las partes de nombrar a particulares jueces legítimos de sus asuntos. Esa facultad no se extiende sin embargo, hasta poder nombrar los ejecutores de los fallos por ellos dictados, porque tal cosa iría contra el orden social. En efecto los árbitros sentencian pero son únicamente los jueces quienes conforme al poder que ejercen por ministerio de la Ley, pueden ejecutar las sentencias arbitrales”.

Balzán (2002:205):

“El arbitramento es el resultado de una convención que las partes celebran para sustraerse con la anuencia de la Ley, a la jurisdicción ordinaria creada por el Estado y para someterse al laudo que dicten los juzgadores por ellas mismas escogidos para resolver las controversias.”

Feldstein de C. y Leonardo de Hebrón (citado por Sánchez, 2006:97):
la institución que permite a las personas dirimir sus conflictos ante

terceros imparciales, llamados árbitros, a quienes eligen libremente, con el objeto de que den solución definitiva a sus diferencias[...]sustrayéndose de la intervención de los órganos estatales”

Couture (citado por Sánchez, 2006:98): “el arbitraje voluntario es aquél que no siendo impuesto por la ley, es adoptado por las partes para dirimir sus controversias, prescindiendo de la jurisdicción ordinaria”.

Obsérvese que el arbitraje está caracterizado por la existencia de un tercero imparcial y dos partes enfrentadas con intereses contrapuestos; dicho tercero es quien resuelve la disputa planteada por éstos, dándole la razón a uno y negándosela al otro; posee la misma estructura que se da en la jurisdicción, en virtud de la existencia de tres partes, una imparcial – nombrado por las partes- y dos con intereses contrapuestos; radicando la diferencia en que aquel no esta dotado de todas la facultades que por ley tiene el Juez que sí forma parte del órgano dotado de jurisdicción; asimismo, se diferencia de la conciliación, en que no son las mismas partes la que resuelven sus diferencias, sino un tercero imparcial.

En este sentido, se puede definir el arbitraje como el procedimiento en virtud del cual un tercero imparcial nombrado por dos partes con intereses contrapuestos, resuelve dichos intereses a través de una decisión denominada laudo, poseyendo ésta la misma fuerza que una sentencia que emana de la jurisdicción.

Este procedimiento aún y cuando tiene similitud con la jurisdicción ordinaria, sin embargo, posee también su propias reglas que la diferencia de aquella, como por ejemplo, el arbitro no puede ejecutar la decisión que ha emanado de él, tal como sí ejecuta su propia sentencia los jueces que forman parte de la jurisdicción. Y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, el arbitraje puede ser de derecho o de equidad, tal como lo expresa el artículo 618 del Código Adjetivo Civil:

“Los árbitros son de derecho, o arbitradores. Los primeros deben observar el procedimiento legal, y en las sentencias, las disposiciones del Derecho. Los segundos procederán con entera libertad según les parezca más convenientes al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad.”

Con respecto a las clases de arbitraje, citando a Gabaldon, expresa Sánchez (2006:117):

El arbitraje de derecho, es aquél en que los árbitros constituidos, denominados árbitros de derecho o “*arbitraje iuris*” “están obligados a respetar desde el punto de vista adjetivo y del sustantivo las normas del derecho aplicable; es decir, que en la sustanciación y decisiones de la controversia deben atenerse al ordenamiento jurídico aplicable al caso sub-judice tanto en el aspecto procesal como respecto a la solución del fondo del litigio.

El arbitraje de equidad, es aquél en que los árbitros constituidos, denominados árbitros arbitradores o “amigables componedores”, “no están obligados a someterse a las normas jurídicas que ordinariamente serán aplicables sino que pueden, tanto en lo que respecta al procedimiento mismo para llegar al fallo arbitral como a la decisión contenida en este último, guiarse fundamentalmente por lo que consideren más equitativo, es decir, más justo en el caso concreto.”

Ello significa, que el árbitro en el arbitraje de derecho decide la controversia como si fuese un Juez de la República, es decir, mediante la aplicación e interpretación del derecho; mientras que en el arbitraje de equidad, las normas del derecho pueden quedar al margen de la decisión, atendiéndose sólo a la equidad, entendida ésta como la justicia aplicada al caso concreto.

Es importante tener presente tal clasificación del arbitraje, a los efectos de la presente investigación, puesto que el determinar a cual de ellos pertenece el aplicable en los conflictos colectivos del trabajo y al que hace referencia el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ratificará algunos puntos de vista dadas por el autor, y sustentará la conclusión final del trabajo.

2. Materias Pertenecientes al Arbitraje.

El primer párrafo del artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, da la respuesta a ésta interrogante:

“Las controversias pueden comprometerse en uno o más árbitros en número impar, antes o durante el juicio, con tal de que no sean cuestiones sobre estado, sobre divorcio o separación de los cónyuges, ni sobre los demás asuntos en los cuales no cabe transacción.”

Con respecto a éste punto expresa Redenti (citado por Sánchez, 2006:112): “el negocio con que las partes encomiendan la decisión a los árbitros, se considera acto de disposición y no puede consentírsele allí donde las partes no tengan el derecho o la legitimación (posibilidad-facultad-poder) a disponer de él libremente”

Según el Tribunal Constitucional Español (citado por Sánchez, 2006:113): “el arbitraje sólo llega hasta donde alcanza la libertad, que es su fundamento y motor; quedan extramuros de su ámbito las cuestiones sobre las que los interesados carezcan de poder de disposición”.

Asimismo, Balzán (2002:214), con respecto a las materias que pueden ser sometidas al arbitraje, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, expresa:

“(…)dado que el arbitraje implica renuncia a valerse las partes de los órganos jurisdiccionales, y de allí que en casos donde esté interesado el orden público se sustraiga del compromiso arbitral, ya que el hecho de someter a árbitros una cuestión, envuelve la facultad de disponer, es un acto dispositivo, y obviamente lo relativo al matrimonio, parentesco, filiación, patria potestad donde está interesado el orden público y acciones referidas al estado y capacidad de las personas, no pueden ser sometidas a arbitraje.”

Obsérvese que las mismas limitaciones que existen en la conciliación se encuentran en el arbitraje en lo que respecta a las materias que pueden ventilarse por medio de estos procedimientos. Las materias donde está inmerso el orden público no pueden ser decididas a través del procedimiento arbitral.

3. Materias que desde el punto de vista de la Ley Orgánica del Trabajo, pertenecen al arbitraje.

Al igual que la conciliación, cuando el legislador en el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que los Tribunales Laborales conocerán los asuntos contenciosos que no correspondan a la conciliación ni al *arbitraje*, no lo enfoca desde el punto de vista de las materias que de acuerdo al punto anterior no pueden ser tramitadas por medio de éste; puesto que para entender el verdadero sentido de la norma, hay que concatenarla con el artículo 5, 469 y 475 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, que a los efectos de ésta, los asuntos que pertenecen al arbitraje son los mismos que pertenecen a la conciliación: a. para modificar las condiciones de trabajo; b. oponerse a

que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento; c. para que se celebre una convención colectiva; d. para reclamar los compromisos contraídos –técnicamente un conflicto jurídico y cuya resolución o no por el poder judicial, será analizada en el último capítulo del trabajo.

En este sentido opina La Roche (2003:112):

“El arbitraje que excluye el ordinal primero de este artículo² no es el arbitraje judicial previsto en esta Ley ni el arbitraje independiente o institucional regulado por la Ley de Arbitraje Comercial. Refiérese al arbitraje prejudicial (llamado también *administrativo*) que tiene por objeto zanjar las disputas que surjan en las negociaciones y conflictos colectivos entre el sindicato o sindicatos de trabajadores y el o los patronos, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento (Art. 469 LOT). De modo similar a lo que ocurre en el procedimiento de esta nueva Ley adjetiva laboral, la primera opción que ofrece el legislador para la solución de tales diferencias es la conciliación (Art. 478 LOT), y luego el arbitraje (Art. 490 LOT).”

Ahora bien, ¿a qué tipo de arbitraje se refiere el legislador en la Ley Orgánica del Trabajo, para la resolución de conflictos de interés o económicos?:

El artículo 492 de ese cuerpo normativo da la respuesta a la interrogante planteada: “(...)Los miembros de la Junta de Arbitraje tendrán el carácter de árbitros *arbitradores* y sus decisiones serán inapelables”(cursiva añadida)

² Se refiere al numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Obsérvese que la norma hace referencia es a un arbitraje de equidad, donde los sujetos que deciden la controversia no están obligados a decidir conforme al Derecho, sino a la equidad, tal como lo establece Días (2003: 211): “Los árbitros tienen carácter de arbitradores, es decir, están facultados para actuar con libertad, según les parezca más conveniente a los intereses de las partes, atendiendo principalmente a la equidad”

Ello ratifica el punto de vista planteado por el autor del presente trabajo cuando se llegó a la conclusión que en los conflictos de interés o económicos no existe ruptura del derecho, es decir, no hay violación de normas, ya sean heterónomas o autónomas, puesto que de ser así, el conflicto sería jurídico o de derecho, teniendo plena facultad para conocer del mismo la “jurisdicción”.

El arbitraje a que se refiere la Ley Orgánica del Trabajo es de equidad, y es lógica tal situación, puesto que en los conflictos económicos o de interés no hay norma jurídica, legal o contractual que aplicar, por ello el árbitro debe decidir conforme al mejor interés de las partes.

El único caso en que siendo un conflicto jurídico o de derecho y que el legislador quiso canalizarlo por el procedimiento destinado a los de interés o económicos, es cuando se busca la reclamación de compromisos adquiridos, caso tal de una convención colectiva cuyo incumplimiento total o parcial por parte del patrono ha generado un choque de intereses.

Todo ello lleva a plantear la siguiente conclusión: los asuntos a que se refiere el numeral 1ero de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que no pueden ser conocidos por la Jurisdicción, puesto que son materia de

conciliación y arbitraje; son los llamados conflictos de interés o económicos y por excepción, un conflicto que siendo jurídico o de derecho, es canalizado por el legislador, por medio del procedimiento destinado aquellos. En este sentido, se está haciendo referencia es: a. para modificar las condiciones de trabajo; b. oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento –salvo que sean medidas en contravención al derecho, por cuanto se convertiría en un conflicto jurídico-; c. para que se celebre una convención colectiva; y d. reclamar los compromisos contraídos–técnicamente un conflicto jurídico-.

CAPITULO IV
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO PARA
CONOCER LOS ASUNTOS QUE CORRESPONDEN A LA
CONCILIACIÓN Y AL ARBITRAJE: NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO
29 DE LA LOPT EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 5 Y 469
DE LA LOT.

Ya se ha analizado en el capítulo anterior, cuales son los asuntos que según el legislador laboral corresponden a la conciliación y al arbitraje, llegándose a la conclusión, de que tal prohibición no debe ser interpretado en el sentido del Código de Procedimiento Civil, es decir, entender que la materia donde este interesado el orden público es la que no puede ser ventilada por los procedimientos antes mencionados, sino aquellos que no involucran la interpretación y aplicación de una norma jurídica, la cual, han sido entendidos como conflictos económicos o de interés.

Ahora bien, las líneas desarrolladas en el presente capítulo serán destinadas a entender cuáles serían las consecuencias que traería el hecho de que tales conflictos que no envuelven la aplicación o interpretación de una norma jurídica, no sean conocidas, de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo y Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por la jurisdicción, sino por un órgano administrativo, quien además no decide esta, sino que coadyuva a la resolución de la controversia. En este sentido, se han enfocado tales consecuencias desde dos puntos de vista: uno, que podría decirse, se toma en cuenta es la conveniencia en que los conflictos surgidos en la relación que vincula al trabajador con el empleador –relación jurídica de carácter laboral-, sean resueltas por las mismas partes y no por un tercero quien orienta su decisión es a nombrar un ganador y un perdedor, más aún, cuando dicha relación contractual laboral está viva y por ende, no ha culminado; y un segundo punto de

vista, enfocado ya, desde una óptica netamente jurídica; analizando las consecuencias de dicha situación, tomando en cuenta todo lo estudiado en los anteriores capítulos.

A. CONSECUENCIAS DE SU NEGACIÓN.

1. Desde la Perspectivas de las Relaciones Empleador-Trabajador.

Hay que recordar que la relación de trabajo, o más aún, el contrato de trabajo forma parte de los denominados “contratos de tracto sucesivo”.

Y esto es importante tenerlo presente, puesto que ello no solamente implica el nacimiento de obligaciones para ambas partes en la medida del transcurso del tiempo, sino también el contacto constante entre las partes que forman parte del contrato mencionado, en este caso, entre aquel que ha sido entendido el *débil jurídico* y el *dueño del capital*. Tal circunstancia, y en aras del respeto de la dignidad de quien no posee el capital, el empleador debe procurar un medio ambiente laboral sano, tanto desde el punto de vista físico como psicológico, tal como lo hace ver el inciso “b” del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.

Bajo esta óptica, y a los efectos de cumplir tal requerimiento enunciado en la norma, en el espacio donde se desenvuelve el trabajador para la prestación del servicio no debe existir un ambiente de hostilidad, que lógicamente sería la consecuencia que nacería bajo la existencia de un conflicto donde a uno de las sujetos involucrados se le adjudique el título de ganador y al otro de perdedor por una decisión emanada de un tercero; más aún, cuando los criterios utilizados por el juzgador para decidir la controversia en muchas ocasiones no son convincentes para las partes involucradas.

Tanto cuando sea el empleador o el trabajador quien se le ha adjudicado el título de ganador, existe el riesgo del ambiente de hostilidad antes mencionado; es por ello, que es inexorablemente conveniente que sean las mismas partes las que pongan fin a sus diferencias, mediante el manejo de una serie de planteamiento e ideas, que naciendo de ellas mismas, no traerá la secuela descrita líneas arriba, ya que, canalizarán la solución a un punto de equilibrio tal, que sea beneficiosos para ambas partes, dándose la relación “ganar -ganar” y no “ganar - perder”, que es lo que normalmente sucede cuando se orienta la solución de la controversia por medio de la jurisdicción. Viniendo la solución de las mismas partes, lógicamente ellas estarán convencidas de la respuesta dada al conflicto.

2. Desde la Perspectiva del Derecho Constitucional Procesal.

A los efectos de entender, a qué consecuencias se refiere el presente título, se debe comenzar definiendo lo que la doctrina ha denominado “Derecho Constitucional Procesal”. En este sentido, Aroca (1995:310) expresa:

“(…)La constitucionalización de los principios ha adquirido tal alcance que se habla ya de la existencia de un derecho constitucional procesal, lo que supone la aparición de una orientación metodológica que se propone profundizar en el estudio de la dependencia de la regulación procesal de los valores sociales y políticos recogidos por las constituciones.

(…)Suele hoy distinguirse entre derecho procesal constitucional, parte del derecho procesal que tiene por objeto el estudio del proceso constitucional, y derecho constitucional procesal, que estudia las normas procesales recogidas en las constituciones.”

El primero ha que hace referencia Aroca: “Derecho Procesal Constitucional”; esta orientado es al estudio de todos aquellos mecanismos procesales que buscan la defensa de la constitución, como por ejemplo: la pretensión de amparo constitucional, el control difuso o concentrado de la constitucionalidad, la revisión constitucional, entre otros; y el segundo: “Derecho Constitucional Procesal”; se orienta es a los principios y normas procesales elevadas a rango Constitucional, dentro de la cual se encuentra en el ordenamiento jurídico venezolano, el artículo 49 Constitucional:

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.³

Asimismo, se encuentra dentro de este –Derecho Constitucional Procesal-, la tutela judicial efectiva, contemplada en el artículo 26 de la Carta Magna, en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Dicho principio encierra una serie de derechos para con los justiciables –dentro de la cual también se encuentra el Estado-, que ya fueron analizados en el primer capítulo del presente trabajo; existiendo dentro ello uno que interesa recordar a los efectos de éste título, la cual es el “acceso a la jurisdicción”.

Ya se dijo en esa oportunidad que el acceso a la jurisdicción tiene que ver con la denominada “acción”, entendida esta como “Un derecho humano fundamental que materializa la jurisdicción como función-*deber*

³ El autor del presente trabajo excluye el numeral 8vo, por cuanto s su entender, es una norma sustantiva y no procesal.

del Estado de resolver las pretensiones de relevancia jurídica que le sean planteadas por todo aquel que tenga un interés”.

En este sentido, el acceso a la jurisdicción tiene que ver con la posibilidad jurídica de que el Estado entre a conocer las pretensiones llevadas a él por los particulares, a través de la jurisdicción, la cual también fue definida en los siguientes términos:

“Deber del Estado, canalizado a través de órganos independientes, predeterminados por la Constitución o la Ley, de resolver las *peticiones de derecho* que plantee todo aquel que tenga un interés, y cuya resolución tiene la posibilidad de adquirir firmeza, a los efectos de seguridad jurídica como uno de los fines del Derecho y susceptible de ejecución forzosa ante la eventual resistencia del obligado”.

Ahora bien, cómo entender la circunstancia, de que la acción siendo un derecho que tienen todos los justiciables; y la jurisdicción un deber del Estado de resolver las peticiones de derecho, por medio de una decisión que adquiere firmeza y con posibilidad de ejecución forzosa ante la resistencia del obligado, canalizado por medio de un órgano que se caracteriza por su independencia e imparcialidad; existan, por disposición legal, asuntos que aquel –el Estado, a través de su función jurisdiccional con todas las características enumeradas – no puede conocer, sino a través de órganos no dotados de jurisdicción.

Y es el caso de los asuntos, que según la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica del Trabajo, no pueden ser canalizados sino por medio de la conciliación y el arbitraje.

En este sentido, el artículo 29 de la Ley Adjetiva Laboral, en su numeral 1ero, le quita jurisdicción a los Tribunales con competencia

laboral para conocer de asuntos que según la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde es a la conciliación y al arbitraje. Ello pudiese plantear una interrogante ¿el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, suponen una violación a la tutela judicial efectiva en su contenido de acceso a la jurisdicción, y por ende devienen en inconstitucional?.

Para dar respuesta a la mencionada interrogante hay que tener presente los puntos analizados en los capítulos precedentes.

En dichos capítulos se llegó a la conclusión de que los asuntos que pertenecen a la conciliación y al arbitraje a que hace referencia la ley adjetiva y sustantiva laboral, no hay que entenderla en el sentido del Código de Procedimiento Civil, es decir, como aquellas materias que no interesen al orden público, la cual, según una interpretación de la normativa que aquel regula sobre la materia, pueden ser resueltas por medio de tales mecanismos de resolución de conflictos; sino entenderla como aquellos asuntos que envuelven un conflicto económico o de interés, las cuales, según las conclusiones a que se llegó en el capítulo destinado a su análisis, no encierran la aplicación o interpretación de una norma preexistente, legal o convencional.

Siendo ello así: que el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo excluye del conocimiento de la jurisdicción los asuntos que según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo pertenecen a la conciliación y al arbitraje, es decir, los llamadas conflictos económicos o de interés, que no envuelven la aplicación o interpretación de una normas jurídica; no pudiese hablarse de violación a la tutela judicial efectiva en su contenido de acceso a la jurisdicción y por ende de la inconstitucionalidad de dichos artículo; ya que, entendida la jurisdicción como “ El deber del Estado (..) de resolver las *peticiones de derecho* que

planteen los particulares”(cursiva añadida); y no siendo los conflictos económicos o de intereses, pretensiones que versan sobre peticiones de derecho, ya que no involucran la aplicación o interpretación de normas constitucionales, legales o convencionales. la exclusión de tales conflictos del conocimiento de la jurisdicción no implica que ésta se esté eximiendo del deber que tiene de resolver peticiones planteadas, por cuanto su deber está enfocado es a resolver pretensiones que envuelve la aplicación o interpretación del derecho.

Por ello, es importante tener presente, si el conflicto que nace entre las partes de la relación de trabajo es o no, económico o de interés, puesto que ante una mala interpretación del conflicto, al entenderse como aquel, siendo jurídico o de derecho, pudiese el juzgador, amparándose erróneamente en el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Adjetiva Laboral, declararse en falta de jurisdicción, violentando de esta manera el derecho de acceso a la jurisdicción que tienen todas las personas y el deber que tiene el Estado de resolver tal petición, con todas los caracteres que implica la función jurisdiccional. Tal sería el caso, de ciertas medidas que tome el empleador para con su trabajadores y que los afecte en alguna manera, la cual, pareciera ser a simple vista un conflicto económico o de interés, ya que se encuentra dentro de los supuestos que contempla el artículo 469 de la Ley Orgánica del Trabajo; sin embargo, tal medida pudiese implicar la violación de una norma jurídica, por lo tanto, nada obsta que se ventile por el procedimiento de conciliación o arbitraje que contempla dicha ley; pero, si se buscara canalizar la resolución del mismo por medio del órgano jurisdiccional, no pudiese de alguna manera eximirse este de conocer del mismo, amparado en el mencionado artículo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, si tal medida no implica la violación de norma jurídica alguna, el órgano jurisdiccional sí puede eximirse de conocer del mismo, ya que no involucrando la interpretación o aplicación del derecho, y por tanto, el *deber* del Estado de conocer por medio de la función jurisdiccional las peticiones de derecho, no se estaría quebrantando, ni se le esta violando el derecho al justiciable de acceder al poder judicial para que emita una sentencia impregnada de las caracteres de la jurisdicción.

Sin embargo, hay un conflicto que plantea el artículo 5 y 469 de la Ley Sustantiva Laboral, que el legislador, aún y cuando busca canalizarlo como si fuese económico o de intereses, técnicamente es jurídico o de derecho, que es el caso de la reclamación de los compromisos contraídos, así lo plasma el artículo 5: “(...)y los que se planteen para exigir el fiel cumplimiento de los compromisos contraídos se tramitarán de acuerdo con lo pautado en el Título VII de esta Ley”; y el artículo 469: “Las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre uno (1) o más sindicatos de trabajadores y uno (1) o más patronos, (...) para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, (...) se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo”; además de que lo establece de una manera imperativa: “se tramitarán”.

Obsérvese, que el incumplimiento de una convención colectiva, es el incumplimiento de una norma convencional, y por ende, implica un conflicto jurídico o de derecho, ya que el juzgador deberá interpretar u ordenar la aplicación del derecho vulnerado. En este caso, nada obsta que su resolución sea canalizado por el procedimiento a que hace referencia la normativa laboral –conciliación y arbitraje-, sin embargo, planteado que sea por ante el poder judicial, éste no puede eximirse de conocer, amparado en el numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, puesto que se estaría relevando de un deber y estaría violentado un derecho “acceso a la jurisdicción”. En este caso, sí

es una petición de derecho que se está buscando sea resuelta por el órgano jurisdiccional, la cual es su función, de acuerdo a la definición que se ha manejado en la presente investigación.

En este sentido, hay una inconstitucionalidad parcial del artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuya resolución ha de plantearla el Juzgador haciendo una interpretación de dichos artículos a la luz de las normas constitucionales.

Basado en el principio de la primacía constitucional a que hace referencia el artículo 7 de la Carta Magna, cuando establece: “La constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”; el Juez debe dar prioridad a la norma suprema del artículo 26 constitucional y entrar a conocer sobre el conflicto consistente en el incumplimiento de una convención colectiva, es decir, hacer prácticamente uso de la llamada “interpretación conforme a la Constitución”:

“La supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación –por operadores públicos o por operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o administrativos- en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los específicos referentes a la materia de que se trate.

Este principio es una consecuencia derivada del carácter normativo de la Constitución y de su rango supremo y está reconocido en los sistemas que hacen de ese carácter un postulado básico. Así, en Estado Unidos, todas las Leyes y los actos de la Administración han de interpretarse **in harmony with the Constitution**; en Alemania el mismo principio impone **die verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen**, la interpretación de las Leyes conforme a la Constitución. En ambos casos, como prácticamente en todos los países con justicia constitucional, el principio es de formulación

jurisprudencial”. (García de Enterría citado por Perdomo, 2008:18).(negrilla del autor)

Asimismo lo ha expresado la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República, en numerosas sentencias, entre la cual se encuentra la No. 1.269 de fecha 19-07-2001, en los siguientes términos:

“todos los órganos judiciales tienen la potestad, primero, de observar directamente las normas constitucionales o de aplicar las reglas del ordenamiento jurídico desde una interpretación conforme con aquéllas; segundo, de desaplicar las normas legales o sublegales contrarias a ésta; tercero, de asegurar la integridad de la Constitución y, cuarto, de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales. Todo ello con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7, 334 (primero y segundo inciso) y 26, todos de la Constitución.”

En los mismos términos se ha pronunciado la doctrina patria:

“En nuestro sistema de protección constitucional, que incluye la facultad del juez de desaplicar la norma constitucional –control difuso de la constitucionalidad- las posibilidades son aun más amplias, pues no puede una ley contrariar la Constitución, ni en su letra ni en su espíritu, por tanto los derechos y garantías constitucionales deben ser el norte que guíe nuestra interpretación e integración del Derecho. Entre varias interpretaciones posibles debe optarse por aquella que garantice esos derechos, aun cuando no sea la más apegada al texto legal, y si no es posible, insistimos, interpretar la ley de manera que no se lesionen los derechos constitucionales, debemos entonces desaplicarla, pues para ello tiene facultad nuestro juez”.(Mejía Abreu, citado por Perdomo, 2008:20)

En el caso analizado en el presente capítulo, como lo ha expresado la jurisprudencia y doctrina patria, el Juez laboral debe en primer lugar, interpretar las normas en comento a la luz de los principios y garantías

constitucionales, específicamente, conforme al artículo 26 que da el derecho a todos y el deber al Estado de canalizar las pretensiones jurídicas a través de la jurisdicción.

En este sentido, bajo dicha interpretación, todo conflicto jurídico o de derecho, así el legislador laboral en la Ley Orgánica del Trabajo: artículo 5 y 469; haya enfocado su resolución conforme al procedimiento de la conciliación y arbitraje propios de los conflictos económicos o de interés, una vez llevados a la jurisdicción, el Juez laboral no puede eximirse de conocer del mismo, so pretexto de estar inmerso en el supuesto de hecho del numeral 1ero del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que estaría colocando la ley por encima de los derechos y principios garantizados Constitucionalmente.

Como se observa, el problema es resuelto interpretando la norma conforme a la constitución, ya que una interpretación en este sentido no lesiona los derechos y principios garantizados en ella, por tal motivo, no es necesario que el Juez haga uso del control difuso y mucho menos el Tribunal Supremo de Justicia del control concentrado, por cuanto basta una simple interpretación en los términos planteados.

CONCLUSION

La tutela judicial efectiva implica una serie de derechos desde el punto de vista procesal, que dada su importancia, han sido garantizados en el instrumento legal que contempla la estructura y la fisonomía de un Estado, como lo es la constitución; no siendo Venezuela un país que ha estado al margen de este proceso, por cuanto tal institución es contemplada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; asimismo, no se ha limitado su garantía a través de normas internas, sino también internacionales.

Dentro de los derechos y garantía que implica la llamada “tutela judicial efectiva”, se encuentra, entre otros: el *acceder a la jurisdicción*; obtener una sentencia que resuelva sobre el fondo de la controversia; el tener la posibilidad de hacer uso de los recursos legalmente previstos; el derecho que tiene el particular a que la sentencia pueda ser materializada, es decir, el poder ejecutar lo decidido, dentro de la cual se puede ubicar las institución de las medidas cautelares, por cuanto ellas permiten tal posibilidad de ejecución; siendo el primer derecho el objeto de estudio de la presente investigación.

Con respecto a él, se entendió que tiene relación con la denominada “acción”, la cual fue definida como “Un derecho humano fundamental que materializa la jurisdicción como función-*deber* del Estado de resolver las pretensiones de relevancia jurídica que le sean planteadas por todo aquel que tenga un interés”.

Por lo tanto, el acceso a la jurisdicción implica el derecho que tiene todas las personas de hacer entrar o canalizar sus pretensiones a través de ese deber del Estado que tiene de resolverlas, es decir, lo que se ha entendido como jurisdicción, por ello definida en el capítulo I, como:

“Deber del Estado, canalizado a través de órganos independientes, predeterminados por la Constitución o la Ley, de resolver las *peticiones de derecho* que plantee todo a quel que tenga un interés, y cuya resolución tiene la posibilidad de adquirir firmeza, a los efectos de seguridad jurídica como uno de los fines del Derecho y susceptible de ejecución forzosa ante la eventual resistencia del obligado”.

En este sentido, con base a las definiciones manejadas y reiterando lo expuesto: todas las personas tienen el derecho de solicitarle al Estado, le sea resuelta sus pretensiones a través de la jurisdicción, con todas las características que implica; pero, sólo aquellas que tengan una solución dada por el legislador.

Ahora bien, en el mundo del derecho laboral, entre otras particularidades que posee y que la hace ser una rama autónoma del derecho común, se encuentra la existencia de dos tipos de conflictos que han sido denominado por la doctrina como: jurídicos o de derecho y económicos o de interés, habiéndose entendido en la presente investigación como conflictos de interés o económicos: aquellos en la cual *no está involucrada la interpretación o aplicación de norma jurídica alguna*; actuando el empleador conforme al derecho, no obstante, su actuación lesiona el interés de los trabajadores o sin lesionar alguno, les esta coartando el derecho de mejorar su calidad de vida, sustentando éste en el principio de progresividad. Y como conflictos jurídicos o de derechos: aquellos en los cuales sí existe la lesión de un derecho subjetivo, haciendo necesaria la intervención de un órgano especializado del Estado que interprete u ordene la aplicación del derecho.

Bajo esta interpretación dada de los mencionados conflictos laborales y ante la interrogante de si el legislador al darle la posibilidad jurídica al funcionario que preside el órgano jurisdiccional, de eximirse de conocer

los conflictos económicos o de interés con base en el número 1º del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto según el artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo deben ser canalizados a través de la administración, cual sería la Inspectoría del Trabajo y por medio de un procedimiento donde el Estado no decide sino coadyuva a la resolución de la controversia, a través de la conciliación o un posible arbitraje aceptado por las partes; pudiere estar en contraposición del derecho antes mencionado, es decir, “la tutela judicial efectiva” en su contenido de acceso a la jurisdicción; o por el contrario, está plenamente ajustado a los derechos, principios y garantías contempladas por la Carta Magna.

Sí se llegó a la conclusión, de que la jurisdicción es un deber del Estado de resolver las pretensiones de derecho; y a sabiendas que los conflictos económicos o de interés no son pretensiones bajo estos términos, es decir, jurídicos; el legislador no se apartó de los principios, derechos y garantías plasmadas en la Constitución, específicamente de la llamada “tutela judicial efectiva” en su contenido de “acceso a la jurisdicción”; sin embargo, el legislador laboral, a través del artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo, quiso que fuese resuelto un conflicto - que aún y cuando no es económico o de interés sino jurídico o de derecho- a través del procedimiento y por medio del órgano destinado para aquellos; cual es el caso de hacer cumplir los compromisos asumidos, como por ejemplo, el incumplimiento de una convención colectiva por parte del empleador.

Siendo técnicamente y bajo el enfoque dado en el presente trabajo, un conflicto jurídico o de derecho, por cuando implica, a los efectos de resolver tal controversia: la interpretación y aplicación de normas autónomas; el órgano jurisdiccional no pudiere eximirse de conocer del respectivo conflicto, aún y cuando, se reitera, el artículo 5 y 469 de la Ley

Sustantiva Laboral de manera imperativa contempla su resolución por medio de un órgano no dotado de jurisdicción, como lo es la administración y a través del procedimiento de conciliación o arbitraje.

De eximirse el órgano jurisdiccional de tal deber, sería una decisión a todas luces contraria a la “tutela judicial efectiva” en su contenido de acceso a la jurisdicción.

El juzgador en este caso, debe hacer uso de la llamada por la doctrina “interpretación conforme a la constitución”, bastando sólo justificar, su deber de conocimiento de tales conflictos, en el artículo 26 Constitucional.

En este sentido, haciendo una interpretación literal, parte de la normativa del artículo 5 y 469 de la Ley Orgánica del Trabajo, es contraria a la Constitución, por cuanto de manera imperativa -caso del artículo 5-, establece una prohibición tácita en que los conflictos plasmados allí, sean resueltos vía jurisdiccional.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Alfonso, I. (1999). *Técnicas de investigación bibliográfica*. (8^{va} ed.). Caracas: Contexto.
- Aroca, J. (1995). *Derecho Jurisdiccional I Parte*. Barcelona-España: José María Bosch Editor S.A.
- Autores Venezolanos. (1994). *Diccionario Jurídico Venezolano D&F (Tomo II)*. Caracas-Venezuela: Ediciones Vitales 2000 C.A.
- Balestrini, M. (2006). *Como se Elabora el Proyecto de Investigación*. Caracas: Editorial Textos.
- Balzán, J. (2002). *De la Ejecución de la Sentencia de los Juicios Ejecutivos de los Procedimientos Especiales Contenciosos*. Caracas-Venezuela. Mobil-Libros.
- Bernardoni, M. (2004). *Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Temas y Tendencias en el Siglo XXI*. Caracas-Venezuela: Editorial La Semana Jurídica, C.A.
- Boueiri S., y Salazar M. Aportaciones teóricas para el abordaje del conflicto y los medios alternativos de resolución con especial énfasis en la mediación. *Cenipec* [Revista en línea], 23. Consultado el 15 de noviembre de 2008 en: www.revenicyt.ula.ve
- Boueiri, S. (2004). Una aproximación socio jurídica del acceso a la justicia. *Revista CENIPEC* [Revista en línea], 22. Consultado el 15 de noviembre de 2008 en: www.revenicyt.ula.ve
- Cabanellas, C. (1976). *Diccionario de Derecho Usual Tomo I*. (9na ed.). Buenos Aires-Argentina: Editorial Heliasta S.R.L.
- Cappelletti, M. (1993). *“Tercer Seminario” en Dimensiones de la Justicia en el Mundo Contemporáneo*. México: Editorial Porrúa.
- Código Penal (2005). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.763 (Extraordinaria), Marzo 16 de 2005.

Código de Procedimiento Civil (1987). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 3.970 (Extraordinaria), Marzo 13 de 1987.

Constitución de la República de Venezuela. (1961). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 662 (Extraordinaria), Enero 23 de 1961.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 5.453 (Extraordinaria), Marzo 24 de 2000.

Constitución Española. <http://www.gva.es/cidaj/pdf/constitucion.pdf>
[Consultada: 2008, Diciembre 08].

Consejo Nacional de Acreditación.
<http://www.cna.gov.co/cont/documentos/legislacion/constitucion.pdf>
[Consultada: 2006, Diciembre 08].

Constitución Argentina. <http://www.constitution.org/cons/argentin.htm>
[Consultada: 2006, Diciembre 08].

Constitución de Ecuador.
<http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/ConstitucionPolitica.htm> [Consultada: 2006, Diciembre 08].

Cordova, E. (2004). La Ley Orgánica Procesal del Trabajo a la Luz de la Legislación Comparada. **Gaceta Laboral** [Revista en línea], 10 (1). Consultado el 15 de noviembre de 2006 en: www.revencyt.ula.ve

Couture, E. (2005). **Fundamentos del Derecho Procesal Civil**. Caracas-Venezuela: Editorial Atenea.

Cuenca, H. (2005). **Derecho Procesal Civil Tomo I**. (9na ed). Caracas-Venezuela: Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca.

Díaz, R. (2003). **La convención colectiva como sistema**. Caracas: Mobil-Libros.

Diccionario Jurídico Venezolano (ya esta pero hay que mirar el tomo a que hace referencia la pagina 36 del trabajo donde se cito y ver si es el año)

García, R. (1988). **Pequeño Larousse Ilustrado**. Buenos Aires-Argentina: Ediciones Larousse

García, L. (2003). El Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva. **Frónesis** [Revista en línea], 10 (3). Consultado el 15 de noviembre de 2006 en: www.revencyt.ula.ve

Guzmán, R. (2006). **Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo**. (14^o Ed.). Caracas-Venezuela: Estudio Jurídico Guzmán, Paytuví & Asociados.

Junoy, J. (1997). **Las Garantías Constitucionales Procesales**. Barcelona-España: Jose María Bosch Editores.

La Roche, R. (2003). **Nuevo Proceso Laboral Venezolano**. Caracas-Venezuela: Editorial Torino.

Ley Orgánica del Trabajo. (1997). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 5.152 (Extraordinaria), Junio 19 de 1997.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002). **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela**, 37.504 (Extraordinaria), Agosto 13 de 2002.

Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo (1959). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 26.266 (Extraordinaria), Noviembre 19 de 1959.

Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela**, 34.060 (Extraordinaria), Septiembre 27 de 1988.

Maduro, E. (1989). **Curso de Obligaciones Derecho Civil III**. (7ª. ed.). Caracas-Venezuela: Editorial Sucre.

Martínez L., y Perdomo J. (2004): **El Derecho a la Jurisdicción en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Caracas-Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia.

Marquez, R. (1983). **Metodología de la Investigación Jurídica**. Mérida-Venezuela: Editado por el Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes.

Messineo, F. (1970). **Manual de Derecho Civil y Comercia, Tomo I**. Bueno Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América.

Naciones Unidas. <http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm>
[Consultada: 2006, Diciembre 08].

Olaso (2007)

Ortiz, R. (2001). **Tutela constitucional preventiva y anticipativa**. Caracas-Venezuela: Editorial Frónesis C.A.

Parlamento del Uruguay.
<http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm>
[Consultada: 2006, Diciembre 08].

Perdomo, J. y otros. (2008). en **Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Venezuela**. Coordinador: Domingo Javier Salgado Rodríguez. Barquisimeto-Venezuela: Editorial Horizonte C.A

Perozo y Montaner J. (2007). Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. **Frónesis** [Revista en línea]. Consultada el 15 de noviembre de 2006 en: www.revenicyt.ula.ve

Petzold, H. (1984) ***Interpretación e integración en el Código Civil venezolano: Hermenéutica jurídica y argumentación.*** Maracaibo: Universidad del Zulia.

Romber, R. (1997). ***Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II.*** (6ta ed.). Caracas-Venezuela: Editorial Arte.

Sadd, C. (2005). Conciliación Laboral como Medio de Resolución de Conflictos. ***Gaceta Laboral*** [Revista en línea], 11 (3). Consultado el 15 de noviembre de 2008 en: www.revencyt.ula.ve

Sánchez, A. (2006). ***Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos.*** (2da ed.). Caracas-Venezuela. Ediciones Paredes

Sapia, J. (2002). ***Justicia Laboral y Medios Alternativos de Solución de Conflictos Colectivos e Individuales del Trabajo*** [Libro en línea]. Lima-Peru: Oficina Internacional del Trabajo. Disponible: <http://white.oit.org.pe/cimt/nn/documentos/149e.pdf> [Consulta: 2008, Noviembre 25].

Solis, M. (2005). ***Consideraciones Acerca de la Naturaleza Jurídica de la Jurisdicción Voluntaria.*** Valencia-Venezuela- Caracas: Vadell Hermanos Editores C.A.

Tamayo y Tamayo, M. (1988): ***El Proceso de la Investigación Científica.*** México DF: Editorial Limusa.

Tribunal Supremo de Justicia.
<http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/indicetematico.html> [Consultada: 2006, Diciembre 08].

Tribunal Supremo de Justicia.
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/708-100501-00-1683.htm>. [Consultada: 2008, Diciembre 08].

Tribunal Supremo de Justicia.
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Noviembre/2212-091101-00-0062%20y%2000-2771.htm>. [Consultada: 2008, Diciembre 08].

Tribunal Supremo de Justicia.
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/708-100501-00-1683.htm>. [Consultada: 2008, Diciembre 08].

Tribunal Supremo de Justicia.
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1503-030702-01-2300%20%20.htm>. [Consultada: 2008, Diciembre 08].

Tribunal Supremo de Justicia.
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1269-190701-01-1275.htm>. [Consultada: 2008, Diciembre 08].

Universidad Nacional Abierta. (1995). ***Técnicas de Documentación e Investigación I***. Caracas-Venezuela: Consejo de Publicaciones de la Universidad Nacional Abierta.